

PRUEBA DEMANDADA



PROYECTO DE CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTO CIVIL

DR. TOMÁS JOFRÉ

Profesor titular de derecho procesal



PROYECTO DE CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTO CIVIL

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº DE ORDEN	4941
UBICACION	J.253
FICHA MATERIA	

BUENOS AIRES

IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD

1926



Buenos Aires, agosto 4 de 1926.

Habiendo presentado el profesor doctor Tomás Jofré el proyecto de Código de procedimiento civil que le encomendara el honorable Consejo directivo,

El decano de la Facultad de derecho y ciencias sociales

RESUELVE

1° Publíquese por medio de la imprenta de la Universidad y circúlese a los magistrados y abogados de la República;

2° Solicítese a los mismos quieran remitir sus observaciones a este decanato, para que sean tomadas en cuenta al redactar el proyecto definitivo;

3° Impútese su impresión a la partida primera, ítem 6, inciso 2° del presupuesto universitario;

4° Comuníquese, registrese y archívese.

CASTILLO.

Carlos A. Ayarragaray.





PRÓLOGO

--



El proyecto de Código de procedimiento civil que entregamos a la discusión pública, fruto de la experiencia adquirida en el ejercicio de la profesión durante más de treinta años y síntesis de las lecciones dictadas en los cursos de seminario, ha sido redactado por resolución de la Facultad de derecho y ciencias sociales de Buenos Aires. La mayor parte de sus disposiciones ha merecido la honrosa acogida de la subcomisión encargada por el Colegio de abogados de preparar un trabajo análogo.

Han colaborado parcialmente, con eficacia, en este trabajo los doctores Clodomiro Zavalía y José C. Miguens y más de cien estudiantes de quinto año, casi todos egresados ya. De éstos es grato decir que si bien no aportaron la experiencia que sólo dan los años, pusieron en cambio su espíritu de investigación,



la frescura de sus impresiones y la savia vigorosa de sus entusiasmos juveniles. Igualmente colaboraron, en fin, con sus datos, sus ideas o sus conocimientos, numerosos entendidos de todos los lugares del país, y también es grato agregar que todo ese material fué ventajosamente aprovechado.

Lamentamos que por no existir estadística judicial en el país, nos haya faltado las cifras necesarias para apreciar la labor de nuestros magistrados y la duración de los juicios; pero entre tanto, y a pesar de los imaginables inconvenientes, hemos recurrido a la investigación personal revisando centenares de causas entre las que tramitan por los tribunales nacionales y provinciales de la República. Si los magistrados vieran a conocer sus observaciones, sería mucho más sencillo redactar un código que llene la aspiración constitucional de afianzar la justicia.

Se habla con frecuencia de la necesidad de unificar procedimientos; pero sorprenderá a muchos esta comprobación a que se ha llegado en los estudios de seminario de la facultad: los quince códigos de procedimiento que rigen en la República se inspiran en idénticos principios y están análogamente redactados. El primero fué copiado, en efecto, de la ley española de 1855; y los otros lo fueron del primero, salvo modificaciones de detalle insuficientes para darles individualidad que los distinga.

Este trabajo no constituye una copia ni una adap-

tación de los códigos vigentes en Europa, y tampoco tiende a operar una revolución en la justicia. En él se ha dado cabida a lo bueno que hay en nuestras leyes, en suma, viejas leyes españolas; y también a la oralidad, a la flexibilidad y al sincronismo de los trámites, y, en fin, a otras ideas fundamentales, largamente experimentadas, que tardan ya demasiado en incorporarse a nuestra legislación.

Con respecto a la oralidad, las ventajas del juicio oral sobre el escrito han sido evidenciadas por la práctica de todas las naciones; y es por eso que lo hemos aceptado, combinándolo, asimismo, en su justa proporción, con la escritura. El predominio del procedimiento escrito propende a que se pierda la noción de lo real y a que se trabé una armazón artificiosa y falsa, olvidando que sólo los pueblos que han vivido la oralidad son aptos para apreciar sus ventajas, del mismo modo que sólo quien ha estado enfermo sabe apreciar la salud. El procedimiento escrito constituye un mal método; y el método, que es fundamental en toda ciencia, transmite además a la jurídica su fisonomía propia. Con malos métodos es imposible implantar buena justicia: el desconocimiento de esta verdad ha traído como consecuencia que en nuestro país los códigos se sucedan a los códigos sin llegar jamás a la buscada solución, y que se atribuya errónea y exclusivamente a los hombres la ineficacia o la morosidad de la justicia. Nuestra opinión sobre los jueces es mejor;





y pensamos que con buena ley nos darán ellos una justicia más rápida y más humana.

Las leyes en vigor son inarticuladas, y ya se trate del asunto más serio y complicado, como del más sencillo o trivial, exigen que toda la pesada máquina judicial entre en actividad. Opinamos que, en cambio, cada derecho y cada acción debe gobernarse, en cuanto sea posible, por reglas propias que se amolden a su naturaleza; y de ahí que hayamos multiplicado los juicios sumarios y sumarísimos y disciplinado todo lo que se refiere a las cuestiones incidentales.

Según nuestro proyecto, muchos asuntos sometidos hoy al procedimiento ordinario deben resolverse, sumariamente, siempre que sus posibles dificultades no impongan la aplicación de todas las formas jurídicas. Esto es, por lo demás, lo que se hace en otros países: si un asunto aparece sencillo, se lo resuelve de inmediato; si ofrece complicaciones, se le somete a procedimiento más complejo; y si, finalmente, presenta múltiples aspectos, a todos ellos debe ajustarse el procedimiento que se emplea para solucionarlo.

Los códigos de fondo reconocen derechos que, por falta de una reglamentación apropiada, resultan ilusorios. Un derecho que no pueda ser ejercido rápida o eficazmente, no es sino un derecho aparente. Cada vez que en los códigos que dicta el Congreso hemos encontrado el reconocimiento de un derecho, hemos

dado a éste todo su dinamismo de acuerdo con su complicación y naturaleza.

Creemos que si dos trámites pueden cumplirse sincrónicamente, no hay razón para escalonarlos; por lo cual opinamos que los incidentes deben marchar por separado y moverse con independencia de la causa principal.

En materia de recursos proponemos principios nuevos, limitando las apelaciones para evitar el peloteo de los expedientes desde el juez a la cámara y desde la cámara al juez, cosa que constituye un abuso intolerable que sólo el poder de la rutina ha podido conservar. Por eso establecemos, contra las sentencias por entregas, que las causas deben ir una sola vez a la cámara, para que ésta se pronuncie sobre todos los puntos resueltos por el juez en el transcurso de la *litis*.

Para regular la competencia hemos contemplado las disposiciones de nuestras leyes de fondo que no tuvieron en cuenta los códigos en vigor, así como las decisiones de la Suprema corte, que es el más alto y prestigioso de nuestros tribunales. También hemos sentado reglas para evitar la peregrinación de los litigantes en busca del juez que resuelva sus controversias, y establecido que los términos sean inprorrogables y perentorios. Hemos introducido la notificación por medio del correo y del telégrafo, cambiado el sistema de apelaciones tan dilatorio actualmente, y limitado las excepciones previas, para contener a los malos





litigantes. Hemos dado el concepto de lo que son partes, y prescrito que la prueba se ofrezca en los escritos de demanda y contestación. Y, finalmente, hemos introducido innumerables modificaciones que serán detalladas y explicadas cuando presentemos la *exposición de motivos* a la Facultad de derecho y ciencias sociales de Buenos Aires.

Tenemos la esperanza de haber interpretado en este trabajo el sentimiento público que pide sin duda más justicia, y de habernos ajustado a las enseñanzas de la ciencia moderna y a los dictados de nuestra experiencia ya diuturna. Y la fundamos en la similitud entre nuestras conclusiones y las que fueron aprobadas por la Conferencia nacional de abogados, reunida en esta ciudad el año 1924.

TOMÁS JOFRÉ.

Buenos Aires, agosto de 1926.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO



I

Buenos Aires, diciembre 29 de 1923.

Señor decano de la Facultad de derecho y ciencias sociales doctor Ramón S. Castillo.

Someto al señor decano el plan de trabajo de la cátedra a mi cargo, a desenvolverse en uno o dos años con la cooperación de los alumnos y de los egresados que quieran participar en el mismo. Será también indispensable requerir el concurso de la magistratura y de las autoridades nacionales y provinciales de todo el país, para el éxito de la idea.

Me propongo, señor decano, proyectar un Código de procedimiento civil que sirva de base al Congreso y a las legislaturas provinciales para la sanción de las leyes que han de contribuir al mejoramiento de nuestra justicia y esa tarea la llevaré a cabo con el profesor suplente doctor Clodomiro Zavaglia y la ayuda de las autoridades y personas ya indicadas.

La Facultad de derecho de Buenos Aires habrá así expresado su pensamiento en la siempre palpitante cuestión de la re-

forma procesal y habrá prestado un servicio al país, que encontrará en el trabajo a que me vengo refiriendo un cúmulo de antecedentes y principios aprovechables por los legisladores nacionales y provinciales, encargados de reformar nuestras leyes adjetivas.

Para conseguir la realización de esta idea menester será empezar a trabajar desde los primeros días del año entrante y a ese efecto sugiero al señor decano las siguientes medidas :

1° Que se encomiende a los alumnos de cuarto año y a los egresados del curso de 1923 que voluntariamente se presten a ello, la recopilación de antecedentes sobre nuestra justicia. El principal de ellos será el que se refiere a la estadística de un juzgado y cámara de apelación por provincia. No necesito evidenciar en esta nota lo que tengo demostrado en libros y revistas : que en el país no existe la estadística judicial, porque el método que se observa en su compilación es defectuoso en absoluto;

2° Que se solicite de los señores jueces nacionales y provinciales su cooperación para el mejor éxito de la obra en proyecto;

3° Que se mande imprimir las fichas que han de servir de modelo para la compilación de los antecedentes pertinentes;

4° Que se requiera del señor ministro de Justicia e instrucción pública su valioso concurso para la consecución de nuestros fines, sea en la fácil obtención de los datos que se le requieran, sea en el fácil acceso al Archivo de los tribunales para compulsar expedientes judiciales terminados, para poder así desentrañar las causas del retardo de nuestra justicia;

5° Que se comunique el pensamiento enunciado a los señores gobernadores de provincia y se les solicite su cooperación, y el envío de las leyes de organización judicial y de procedimiento civil vigente en el territorio de su mando.

El mejoramiento de la justicia por medio de leyes apropiadas



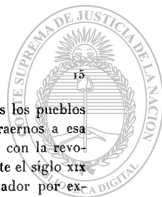
das agita permanentemente los espíritus en todos los pueblos cultos de la tierra y nosotros no podemos substraernos a esa agitación: Francia realizó su revolución jurídica con la revolución de 1789 y su ejemplo fué seguido durante el siglo xix por los países latinos; Inglaterra, el país conservador por excelencia, ha transformado su justicia desde el siglo xvii en adelante; los países germanos marcaron nuevos rumbos, al paso que rusos y turcos cambiaron de ruta el siglo pasado, persiguiendo análogos propósitos. El movimiento de renovación no ha cesado y así vemos que Austria y Alemania marcan un progreso apreciable en sus leyes novísimas, al paso que Italia elabora una transformación del rito procesal a raíz de la gran guerra. Nosotros, que vivimos la vida judicial de la España del siglo xviii, en medio de un progreso material asombroso, que le sirve de contraste, necesitamos ponernos al día en estas materias y esa será la obra a que contribuirá la Facultad de derecho, si realizamos con éxito el pensamiento que se concreta en esta comunicación.

Me es grato saludar al señor decano con mi consideración distinguida.

Tomás Jofré.

El honorable Consejo directivo de la Facultad de derecho y ciencias sociales aprobó por unanimidad el pensamiento enunciado en la sesión del 28 de diciembre de 1923.

Con fecha abril 7 de 1924 el señor decano doctor Castillo informó al Consejo directivo que había organizado el curso de seminario para redactar el proyecto de Código de procedimiento designando a los doctores Jofré y Zavala quienes desempeñarían gratuitamente su cometido.





II

PROCEDIMIENTO EN LO CIVIL Y COMERCIAL

La Conferencia nacional de abogados

DECLARA

Que es necesario unificar las leyes procesales en materia civil y comercial de la República. La Conferencia recomienda las siguientes bases :

- 1ª Adoptar en lo posible la oralidad ;
- 2ª Hacer perentorios todos los términos, tanto para los particulares litigantes, como para los funcionarios públicos que actúen en los juicios ;
- 3ª Establecer como regla general la notificación por el simple transcurso del tiempo ; fijar taxativamente los casos de notificación personal o por cédula y autorizar la notificación por correos y telégrafos. Los funcionarios públicos deberán ser notificados en la misma forma que los particulares litigantes ;
- 4ª Limitar los recursos ampliando los casos en que se acordarán al solo efecto devolutivo ;
- 5ª Establecer la perención de la instancia, la que se producirá de pleno derecho y a breve plazo ;
- 6ª Simplificar la manera de acordar y redactar las sentencias en los tribunales colegiados ;
- 7ª Extender la esfera de aplicación del juicio ejecutivo y simplificar los trámites ;



8° Resolver en una sola audiencia todo lo relativo al inventario, tasación y administración en las sucesiones;

9° Resolver en una sola junta de verificación, graduación de créditos, adjudicación de bienes o liquidación de los mismos en los concursos civiles de acreedores;

10° Substanciar verbalmente y en una sola audiencia, todas las acciones que no tengan un procedimiento especial señalado;

11° Incorporar al Código de procedimientos, las disposiciones de carácter procesal que figuran actualmente en leyes especiales.

El doctor M. Castro pidió quedara constancia de las dos proposiciones siguientes, para que sean tenidas en cuenta al redactarse los códigos:

a) Promovida una cuestión de competencia por inhibitoria, deberá ser comunicada al juez que ha empezado a conocer y se suspenderán todos los trámites;

b) Que el embargo preventivo deberá ser declarado en todas las clases de acciones reales y personales, y cuando no haya cantidad líquida, el juez hará una estimación provisional.

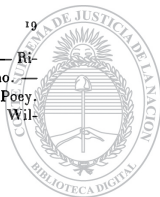
III

ESTUDIANTES QUE HAN COLABORADO EN ESTE TRABAJO

Carlos Aletta da Silva. — Amancio G. Alvarez. — Roberto F. Alvarez. — Héctor Almeida Peltzer. — Andrés Arichuluaga. — Amado Luis Aostri. — Ricardo Arijón. — Manuel Azevedo. — Ciriaco Barzola. — Manuel Barraza. — Carlos A. Barrera. — Pablo Barrenechea. — Albino Barrios. — Julián Barroso. —



Julián A. Basabe. — Juan B. Bessone. — Germán Boljover. — Agustín Borgarelli. — Néstor I. Cáceres. — Horacio Chirinos. — Carlos Casanova. — Félix F. Cocheró. — Ciriaco Condese. — Julio Comelli. — Luis E. Cordeyro Echagüe. — Florentín Cornejo. — José J. Crovetto. — Teófilo Cuello. — Roque Dacunha. — Juan Justo Dassen. — Francisco Decotto Reyna. — Domingo Derisi. — Leopoldo P. Díaz. — Ramón Díaz. — Urbano Eyras. — Pedro Elgoyhen. — Ramón E. Fernández. — Rodolfo O. Fernández. — Luis E. Frías. — Luis de la Fuente. — Alfredo Fuster. — Eduardo Gallo Argerich. — Juan O. Gauna. — Eduardo A. García. — Miguel A. García. — Arturo García Sanabria. — Andrés M. Garro. — Pedro G. Garrone. — Luis A. Gestoso. — Alberto Glauzmann. — Luis César González. — Melitón González. — Aníbal Helguera Gras. — Gustavo E. Jacobo. — Luis A. Giménez Pastor. — Belisario Hueyo. — Mario Jurado. — Carlos Katzenstein. — Oscar Lahores. — Carlos A. Lambrechts. — Severo Larrocca. — Juan F. Legeren. — Fernando Legón. — Julio López Imizcoy. — Tomás Lozada Gaviola. — Luis A. Luco. — Roberto J. Lynch. — Juan Carlos Macome. — José Manganiello. — Tulio Martilotti. — Eugenio Maspero. — Alfredo Mealla. — Ricardo U. Messone. — Oscar Meana. — Alejandro J. Micheletti. — Rodolfo Migliore. — Juan A. Morgana. — Silvio Morgantini. — Eduardo A. Ortiz Basualdo. — Horacio E. Ortega. — Alberto F. Palacio. — Manuel Palacio. — Eduardo Peltzer. — Julio M. Pereda. — Julián Pérez. — Carlos A. Pereyra. — Osvaldo Pereyra. — Jorge W. Perkins. — Alberto C. Piñeyro. — Humberto A. Podetti. — Carlos A. Queirolo. — José A. Reboratti. — Manuel Rodríguez Araya. — Mario Robiola. — Ulises D. Salas. — José Sánchez Puigade. — José Sartorio. — Alberto D. Schoo. — J. M. Silva de la Riestra. — Ismael Segovia. — Jaime Selser. — Eduardo J. Serra. — Jorge M. Serrano. — Felipe A. Sobrero. — Edel-



miro Solari. — Luis C. Solari. — Miguel Sommariva. — Ricardo Sosa. — Raúl A. Suburu. — Roberto Tamagno. — Germán Terán. — Víctor Valle. — Carlos A. Vázquez Pogy. — Ricardo G. Videla. — Jorge Williams. — Mario Williams.

IV

Expedientes revisados por los alumnos y el profesor del curso de seminario :

Capital Federal.....	232
Provincia de Buenos Aires.....	125
Provincia de Catamarca.....	38
Provincia de Córdoba.....	122
Provincia de Jujuy.....	43
Provincia de La Rioja.....	12
Provincia de San Luis.....	188
Provincia de Santiago del Estero...	59
Provincia de Salta.....	35
Provincia de Santa Fe.....	447
Provincia de Tucumán.....	162
Total de expedientes.....	1463

V

Miembros de la comisión de la Conferencia de abogados que despacharon las bases sancionadas por aquella :

Mariano G. Calvento. — Ramón S. Castillo. — Tomás Jofré. — Jorge de la Torre. — Clodomiro Zavallía.



VI

Comisión que estudió este proyecto en el Colegio de abogados de la capital :

Mariano G. Calvento. — Máximo Castro. — Ramón S. Castillo. — Juan Luis Ferrarotti. — Tomás Jofré. — J. Honorio Silgueira. — Oscar Zaeflerer Silva. — Clodomiro Zavalía.

PROYECTO DE CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTO CIVIL



I

REGLAS DE COMPETENCIA

Art. 1°. — La competencia se determina de acuerdo con las reglas siguientes :

a) En las acciones reales y personales de valor económico será juez competente, en general, el que hubiere sido designado expresa o implícitamente por las partes ;

b) No existiendo manifestación expresa o implícita de voluntad, en las acciones reales, corresponderá conocer :

1° Cuando versen sobre bienes inmuebles al juez donde se hallaren situados. El mismo principio rige para las acciones posesorias, de despojo, restricción y límite del dominio, medianería, posesión treintenaria y cobro de créditos hipotecarios ;

2° Cuando versen sobre bienes muebles el juez del lugar en que se encuentren o el de cualquiera de ellos, si fuesen varios, o el del domicilio del demandado, a elección del demandante ;

3° Cuando versen sobre bienes inmuebles y muebles a la vez, el del lugar donde se encuentren los primeros ;

c) En las acciones sobre disenso, ejercicio de la patria potestad (art. 31, 32 y 42, ley de matrimonio civil ; art. 207, Cód. civil) ; divorcio (art. 104, ley cit.) ; separación de bienes (art. 1292, Cód. civil) ; nulidad de matrimonio (art. 104, ley cit.) ; tenencia de hijos (art. 68, ley cit.) ; autorización para comparecer en juicio (art. 1282, Cód. civil) ; habilitación para ejer-



cer el comercio (art. 12, Cód. de com.); ausencia con presunción de fallecimiento (art. 113, Cód. civil); división de condominio (art. 2746, Cód. civil); cumplimiento de contratos (art. 1212, 1215 y 1216, Cód. civil); pago (art. 747, Cód. civil); rendición de cuentas (art. 74, Cód. de com.); convocatoria de acreedores y quiebra (art. 6º, ley de quiebras); transporte (art. 205, Cód. de com.); tutela y curatela (art. 400, 401 y 405, Cód. civil); accidentes del trabajo (art. 15, ley 9688); cobro de salarios (art. 23, ley 10.505); autorización a los menores para contraer deudas (art. 284, Cód. civil); contra las personas jurídicas (art. 44 y 90, inc. 3º y 4º, Cód. civil; 204, Cód. de com.); entre socios (art. 1649, 1659, 1966, 1981 a 93, 1697, 1701 a 10, 1721, 1750 1769 y 1777, Cód. civil; 296, 403 a 7, 409, 416, 434, 436, 440, 441, 442, 448 y 449, Cód. de com.); la competencia se determinará por las reglas de los códigos civil, de comercio y las leyes mencionadas;

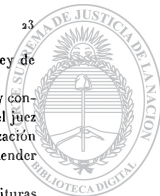
d) En los juicios por cobro de impuestos fiscales y tasas entenderá el juez del lugar donde deban pagarse. Ni el fuero de atracción, ni la conexión, ni la competencia federal pueden modificar esta regla;

e) El juicio de jactancia deberá deducirse de acuerdo con las reglas establecidas para las acciones personales. Pero si el jactancioso es obligado a introducir la acción deberá observar los principios que correspondan, según la naturaleza de la misma;

f) La acción de mensura, deslinde o amojonamiento se rige por el artículo 194 de este código. La competencia tampoco se modificará por el fuero de atracción u otra causa;

g) La competencia en las sucesiones se determina de acuerdo con las reglas establecidas en el Código civil (art. 3284);

h) En el depósito de personas entenderá el juez del lugar en que resida o se encuentre la persona que haya de ser depositada, salvo que se trate de incidentes de otros juicios o de los ca-



sos previstos por otras leyes (art. 276, Cód. civil; 78, ley de matrimonio);

i) En la protocolización o inscripción de instrumentos y contratos otorgados en extraña jurisdicción será competente el juez del lugar en que estén situados los bienes. La protocolización de testamentos corresponde al juez competente para entender en la sucesión;

j) Cuando se trate de expedir segunda copia de escrituras públicas será competente el juez del lugar donde se otorgaron o protocolizaron;

k) En la reposición de títulos será juez competente el de la situación del inmueble;

l) En las acciones personales procedentes de la misma causa, contra varios coobligados que residen en distintos lugares, será competente el juez del domicilio del obligado, que hubiere prevenido en la causa;

ll) En caso de información *ad perpetuam* ésta debe recibirse por el juez a quien corresponda el conocimiento del juicio en que se hará valer. La misma regla regirá para la declaratoria de pobreza;

m) Las disposiciones sobre competencia de los Códigos civil y de comercio, cuando alguno de ellos no prevea el caso, son aplicables a la materia civil o comercial indistintamente, por analogía.

Art. 2°. — Si no fuese posible determinar la competencia de acuerdo con las reglas precedentes, el actor deberá deducir su acción ante el juez del domicilio del demandado. El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar donde se encuentre o en el de su última residencia o en el lugar de la situación de los bienes, sobre que versare la controversia.

Art. 3°. — La competencia, por razón de cantidad de dinero, se fija por el valor que se demanda, computándose los intereses hasta el día de la demanda.



En caso de demandarse el cobro de pagos parciales o intereses, el valor, a los efectos de la competencia, se determinará por el valor total del contrato respectivo.

En las obligaciones de pagar pesos oro de curso legal, se tendrá en cuenta la cantidad de éstos como si se tratase de pesos moneda nacional.

En las obligaciones de moneda que no tenga curso legal en la República se hará la conversión a pesos moneda nacional, de acuerdo al tipo del día de la demanda.

Art. 4°. — La competencia de la justicia civil y comercial, dentro de una misma circunscripción judicial ordinaria, donde existan varios jueces de dichos fueros, queda fijada para el juez y las partes una vez que aquél ha dado curso a la demanda o petición.

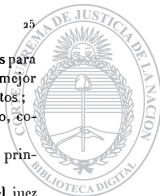
En los casos de competencia federal si no se ha producido la prórroga, cuando ella es permitida, no rige el apartado anterior.

Art. 5°. — La competencia por atracción tiene lugar en las sucesiones (art. 3284, Cód. civil) y en los concursos civiles y comerciales (art. 58, ley de quiebras), de acuerdo con las reglas de los códigos civil y de comercio. Los concursos civiles se rigen por los principios de competencia de la quiebra. No son, sin embargo, acumulables a dichos juicios las acciones de mensura, deslinde o amojonamiento y prenda agraria.

Art. 6°. — Se fijan las siguientes reglas especiales de competencia, en las que no se tienen en cuenta los principios enunciados anteriormente :

a) El juez de lo principal es competente en los incidentes, reconvencción, cumplimiento de transacción hecha en juicio, ejecución de sentencia, cobro de honorarios y costas devengados en juicios ;

b) El juez del juicio de divorcio, o separación de bienes, es competente para entender en el de alimentos y litis expensas, mientras dure aquél ;



c) El juez competente que decretó el primer embargo lo es para las cuestiones suscitadas sobre levantamiento del mismo, mejor derecho a los bienes y preferencia de los distintos créditos ;

d) El juicio ordinario, como consecuencia del ejecutivo, corresponde al juez que entendió en éste ;

e) La obligación accesoria sigue la competencia de la principal ;

f) Es competente en el juicio ordinario de alimentos el juez que entendió en el juicio sumario ;

g) Es competente para conocer de las tercerías el juez que conoce de la causa en que se deducen ;

h) En los juicios por repetición será competente el juez que hubiere entendido en el litigio que provocó la repetición, o que le hubiere correspondido entender, según la naturaleza de la obligación, si el pago hubiese sido efectuado extrajudicialmente y bajo protesta.

Art. 7°. — Los asuntos nuevos se iniciarán ante el juez de turno y será aplicable a ello lo dispuesto en el artículo 4°.

Si el juez considerase que no es competente por razón de turno, mandará devolver la demanda ; si el interesado no estuviese conforme podrá ocurrir directamente al presidente de la cámara, para que éste decida, sin más trámite, la incidencia en forma definitiva.

Art. 8°. — Si de la demanda no resultare claramente la competencia del juez, éste ordenará que el actor exprese lo necesario a ese respecto, dentro de tres días, bajo apercibimiento de darla por no promovida.

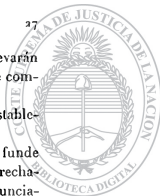


Art. 9°. — Las cuestiones de competencia se substanciarán de acuerdo con las siguientes reglas :

a) Si un juez fuese requerido para declararse competente, en causa de que está conociendo otro juez de extraña jurisdicción, debe fijar audiencia para oír a las partes y recibir las pruebas que se hubieran ofrecido, pronunciándose en seguida sobre la cuestión. Si hace lugar al pedido se dirigirá al juez que se considera incompetente, con los recaudos del caso, pidiéndole le remita los autos o en su defecto los eleve al tribunal encargado de dirimir la contienda ;

b) Cuando un juez de extraña jurisdicción territorial reclame para sí el conocimiento de una causa, recibido que sea el exhorto, lo mandará poner en secretaría por cinco días, notificando personalmente o por cédula a las partes, quienes podrán expresar, dentro del mismo término y por escrito, las razones que tengan para sostener la competencia del otro juez o para rechazarla, ofreciendo en el mismo las pruebas de que intenten valerse. Los testigos no podrán pasar de cinco por cada una de las partes ;

Inmediatamente de recibida la prueba el juez dictará resolución haciendo o no lugar a la inhibitoria. En el primer caso se



enviarán los autos al juez requirente; en el segundo se elevarán al tribunal encargado por la ley de dirimir el conflicto de competencia, haciéndolo saber al otro juez ;

c) La declinatoria se substanciará de acuerdo a lo establecido para las excepciones dilatorias ;

d) Cuando aun dando por exactos los hechos en que se funde la declinatoria el juez la creyere improcedente, puede rechazarla de plano. El actor, a su vez, podrá exigir un pronunciamiento al respecto, dentro de los tres días de habersele hecho saber la excepción, y el juez lo hará sin más trámite.

Art. 10. — No procede la inhibitoria ni la declinatoria para remover una causa entre jueces ordinarios de una misma circunscripción judicial. Las cuestiones de competencia son improcedentes una vez trabado el pleito, o reconocida la jurisdicción expresa o implícitamente.

TÉRMINOS JUDICIALES



Art. 11. — Los términos judiciales se rigen por las reglas siguientes :

a) Empiezan a correr para cada interesado desde su notificación respectiva, si fuesen comunes desde la última que se practicare. No se computa, en ningún caso, el día en que la diligencia tuviese lugar. Si fuesen de horas correrán desde la siguiente a la de la respectiva notificación ;

b) Sólo se interrumpen por la feria judicial (enero) ; semana santa ; carnaval ; domingos ; ascensión del Señor (19 de marzo) ; *Corpus Christi* ; 1 y 25 de mayo ; 29 de junio ; 9 de julio ; 15 y 30 de agosto ; 12 de octubre ; 1 y 11 de noviembre ; 8 y 25 de diciembre ;

c) Son improrrogables y perentorios ;

d) Pueden suspenderse en caso de fuerza mayor o por decreto del Poder ejecutivo. Procede, también, su suspensión a solicitud directa de los dueños del pleito, pero la causa no volverá a tramitarse, si estuviera para juicio oral o sentencia, sino después de 90 días de acordada la suspensión. Este plazo puede ser disminuído por el juez ;

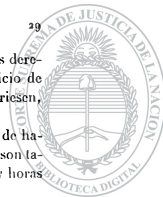
e) Se hallan sometidos a ellos las partes, fiscales, asesores, reparticiones, funcionarios que a cualquier título interviniessen,

debiendo, dentro de los mismos, expedirse o usar de sus derechos, bajo pena de pérdida de los mismos, y sin perjuicio de las responsabilidades legales y disciplinarias en que incurriesen, en su caso;

f) Las diligencias judiciales se practicarán, salvo caso de habilitación que decretará el juez, en días y horas hábiles; son tales los no exceptuados por el inciso *b* de este artículo, y horas hábiles las que corren de las 8 a las 17.

Art. 12. — El secretario o el empleado que designe periódicamente el juez hará constar la fecha y hora al pie de todo escrito que se presente.

Fuera de las horas de oficina no podrá presentarse ningún escrito, considerándose vencido el último día del término pendiente a las 17 horas.



NOTIFICACIONES, TRASLADOS Y COPIAS

Art. 13. — Las notificaciones se harán por ministerio de la ley, personalmente, por cédula, por edictos, por correo y por telégrafo, de acuerdo con las reglas siguientes :

a) Salvo los casos expresamente exceptuados se harán por ministerio de la ley, cuando las partes no hayan concurrido a la secretaría del juzgado o tribunal, los días martes y viernes, o el subsiguiente hábil, si alguno de ellos fuese feriado. El secretario estará obligado a llevar un libro, que colocará en lugar visible, y en el que las partes podrán asentar sus firmas, con indicación de la fecha, para acreditar su comparencia. El libro se cerrará diariamente con la firma del secretario.

Desde que las partes han sido notificadas de los días designados para oír providencias, las que se dicten se tendrán por notificadas por el simple transcurso del tiempo (en caso de no comparencia de aquéllas), sin necesidad de nota, certificado u otra diligencia.

Estas prescripciones rigen para los terceros, que por cualquier título interviniesen en los autos y a quienes se les haya hecho saber los días para oír providencias :

b) Será notificado, personalmente o por cédula, en el domicilio de los litigantes :





- 1° La demanda y la citación a estar a derecho ;
 - 2° El auto que ordena la absolución de posiciones, a la parte que debe absolverlas ;
 - 3° El que ordena la apertura de la causa a prueba ;
 - 4° Las sentencias o resoluciones finales que se declaran apelables en ambos efectos o en uno sólo y que no esté ordenado se hagan saber en otra forma ;
 - 5° El requerimiento de un acto a la parte que deba practicarlo ;
 - 6° Las resoluciones que expresa y taxativamente se enumeran en esta ley ;
 - 7° Toda resolución si la parte comparece voluntariamente a la oficina ;
- c) Cuando las notificaciones se hiciesen en la oficina se extenderán en el expediente y deberán ser firmadas por el interesado, pudiendo la persona a quien se hagan, sacar copia de la providencia ;
- d) La notificación será firmada por el actuario o empleado designado al efecto y por el interesado. Si éste no supiese o no pudiese firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si no quisiese firmar, lo harán dos testigos requeridos al efecto por el notificador, no pudiendo servirse nunca para ello de los empleados de la oficina ;
- e) Si la notificación se hiciere en el domicilio de los litigantes el notificador llevará por duplicado una cédula en que esté transcrita la parte dispositiva del auto o sentencia que va a notificar, y después de leerla íntegra al interesado, le entregará una de las copias y al pie de la otra, que se agregará al expediente, pondrá constancia de todo, con la expresión del día, hora y lugar en que se hubiese practicado la diligencia, observando, respecto de la firma, lo prescrito en el inciso anterior ;
- f) Cuando el notificador no encuentre la persona, a quien va a notificar, entregará la cédula a cualquiera persona de la casa,



empezando por la más caracterizada, y a falta de ella, a cualquier vecino que sepa leer, prefiriendo los más inmediatos y procediendo en todos los casos en la forma prescrita en el inciso precedente;

g) Toda notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores o en día u hora inhábil será nula y el notificador que la practicase, a más de responder por los perjuicios que causare, incurrirá en multa de veinticinco pesos la primera vez, de cincuenta la segunda, perdiendo el puesto en caso de nueva reincidencia.

Sin embargo, siempre que resulte de autos haber tenido la parte noticia de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviera legítimamente hecha, sin que por esto quede relevado el notificador de la responsabilidad que se deja establecida en el primer apartado de este inciso.

Art. 14. — Procede la notificación por edictos :

1° Cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se declare ignorar ;

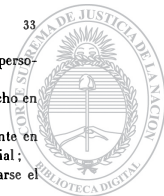
2° En todos los demás casos previstos por este código.

En el caso del apartado 1° la publicación se hará de acuerdo con la manifestación que haga el que la solicite y bajo su responsabilidad. Si resultare falsa esa manifestación se anulará todo lo actuado, a su costa, y será, además, condenado a una multa de cincuenta a quinientos pesos, a beneficio de la parte contraria.

Art. 15. — La notificación por edictos se hará en dos diarios designados por leyes especiales y, en su defecto, por el juez. y se acreditará agregando un ejemplar de los mismos y el recibo de la imprenta respectiva. El juez no puede designar más de dos diarios.

La notificación surtirá los mismos efectos que si se hubiere hecho personalmente o por cédula.

Art. 16. — Procede la notificación por correo :



1° Si el traslado de la demanda no ha sido notificado personalmente sino por cédula ;

2° En la citación para absolver posiciones, si se ha hecho en la forma precedente.

En los dos casos la notificación se hará al día siguiente en que se dejó la cédula sin necesidad de nueva orden judicial ;

3° En el requerimiento, a la parte que deba practicarse el acto requerido ;

4° Cuando se trate de citar testigos o peritos ; si estos no comparecieren sufrirán pena de diez a treinta pesos y se les citará por cédula bajo apercibimiento de traerlos por la fuerza pública. Los testigos y peritos no serán citados cuando la parte que los ofrece prometa traerlos a la audiencia, y sino lo hace, podrá ser condenada, inmediatamente, a una multa de veinte a doscientos pesos, en beneficio de la parte contraria.

Art. 17. — Para las notificaciones a que se refiere el artículo anterior, la parte depositará en secretaría las esquelas estampadas como pieza certificada con recibo de retorno y en forma de memorándum. El secretario dejará constancia en los autos del número de tales esquelas expedidas, de la fecha de su expedición y de la resolución que se notifique, la que se considerará notificada al día siguiente de expedida la esquila.

Art. 18. — En los mismos casos en que procede la notificación por correo podrá hacerse ésta telegráficamente, cuando la parte así lo pidiere, a su costa. La notificación se hará por telegrama recomendado, colacionado o múltiple, si se trata de varias personas a quienes deba hacerse saber la misma resolución.

Art. 19. — En los casos en que proceda la notificación por cédula o por edictos pueden las partes presentar a secretaría la respectiva pieza, escrita a máquina por duplicado, la que después de cotejada por el secretario y firmada y sellada será expedida. El duplicado se agregará a los autos.



Cuando los interesados lo pidan expresamente podrán acompañar al notificador y la notificación se hará aún fuera del domicilio, si la persona a quien ha de hacerse saber la resolución no ha sido encontrada en el mismo.

Art. 20. — Las partes, de común acuerdo, pueden proponer al juez o tribunal el nombre de un escribano para que haga las notificaciones, reciba informaciones de testigos o practique otras diligencias de prueba, autorizadas por esta ley. El honorario del escribano lo fijará el juez o tribunal, al tenerlo por nombrado, y se depositará su importe en el banco y será retirado una vez concluido el trabajo.

Art. 21. — Cuando proceda una vista o traslado se observarán las siguientes reglas :

a) El plazo, dentro del cual deberá expedirse la parte a la que se le ha dado vista, es de tres días, salvo disposición en contrario de este código ;

b) Toda vista o traslado se dará en calidad de autos ;

c) Cuando sean varias las personas con quienes se litigue se entregarán tantas copias cuantos sean los litigantes. Estas copias serán entregadas al notificarse a la otra parte la respectiva providencia. De no presentarse las copias del escrito y de los documentos respectivos, no se dará curso a la incidencia.

Si no hubiese sido posible entregar las copias, por tratarse de una notificación por ministerio de la ley, por edictos o por no haberse encontrado al interesado, este podrá reclamarlas en secretaría.

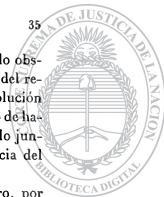
Art. 22. — No se entregará a las partes el expediente original, salvo que se trate de operaciones de contabilidad complicadas, de la cuenta particionaria, de la liquidación de la sociedad conyugal, división de condominio, acuerdo de partes, y otorgamiento de escrituras judiciales.

Art. 23. — Si vencido el término por el cual se entregó el expediente no se hiciera su devolución, se incurrirá en una mul-

ta de cincuenta pesos por cada día de retardo, sin que ello obste a que el secretario exiga la devolución en el domicilio del requerido. Si al día siguiente tampoco se efectuara la devolución el juez o tribunal decretará inmediatamente, sin perjuicio de hacerse efectiva la multa, el arresto del culpable, poniéndolo juntamente con los antecedentes a disposición de la justicia del crimen.

Si el expediente hubiese pasado a poder de un tercero, por cualquiera causa que fuese, se le hará igualmente la intimación, bajo las mismas responsabilidades del apartado anterior, sin perjuicio de lo dispuesto respecto al obligado principal.

Art. 24. — Ninguna notificación podrá ser demorada por falta de papel sellado. Cuando el litigante no hubiera entregado el papel sellado se la practicará en papel simple, con cargo de reposición.



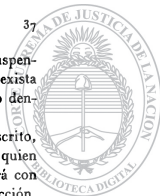
PODERES Y DEBERES DEL JUEZ

Art. 25. — El procedimiento lo dirige el juez, salvo los casos de excepción, y a ese efecto debe : adoptar las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, a fin de pronunciar una resolución justa ; mantener la igualdad entre las partes ; y adoptar las medidas necesarias para obtener celeridad y economía en el juicio.

Puede proceder de oficio en cualquier estado de la causa, a fin de que : comparezcan las partes, peritos o terceros ; que se agreguen o exhiban documentos existentes en poder de las partes o a que las mismas se hayan referido ; de que se acumulen dos juicios conexos ; o de que la discusión se limite a una o más excepciones o puntos controvertidos.

Art. 26. — Los jueces y tribunales a los efectos de la terminación de los pleitos, deben : a) mantener el orden y decoro ; b) mandar testar o inutilizar toda frase o escrito injurioso o redactado en términos indecorosos u ofensivos, sin recurso alguno ; c) imponer correcciones disciplinarias, que consistirán en apercibimientos, multas hasta trescientos pesos, detención hasta veinte días y suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por dos meses ; d) excluir de las audiencias a los que perturben el orden de las mismas. La reincidencia,





en los casos de haberse aplicado multa, detención o suspensión, se castigará con el doble de la pena. Para que exista reincidencia la nueva infracción debe haberse cometido dentro del año.

Art. 27. — Si el interesado reclamase lo hará por escrito, dentro del tercero día, directamente ante el superior, quien resolverá sin más trámite. Esta reclamación se instruirá con un certificado del secretario del juez que aplicó la corrección, donde se expondrán los antecedentes o testimonios del caso, sin perjuicio de la ampliación que puede solicitarse al juez. En el juicio oral la reclamación cuando procede, se hará en la misma audiencia en que se aplique la corrección y el secretario entregará al día siguiente los recaudos, para que el interesado pueda ocurrir ante el superior.

Art. 28. — Es deber de los jueces :

a) Administrar justicia de buena fe y sin retardo en el orden establecido por la ley ;

b) Motivar sus resoluciones definitivas o interlocutorias, aplicando, en primer término, la Constitución nacional, las leyes que en su consecuencia se dictan por el congreso, los tratados con las naciones extranjeras y las leyes provinciales u ordenanzas municipales, según el caso. Si no existe texto legal se recurrirá al espíritu de la ley, a los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y a las reglas generales del derecho ;

c) Oír oralmente a los parientes de las partes que residan en el lugar del juicio para mejor informarse en los casos de disenso, divorcio, insania, tenencia de hijos y pérdida de la patria potestad. Del acto no se dejará constancia escrita ;

d) Tener por ciertas las afirmaciones de la parte, siempre que la contraria no se someta a un reconocimiento ; no exhiba libros o documentos que existan positivamente en su poder ; no permita la práctica de una inspección ocular o en

otros casos análogos. La resolución que se dicte en ese sentido es apelable en un solo efecto, salvo cuando proceda el recurso preventivamente;

e) Resolver dentro de tercero día, como máximo, cuando en esta ley se dice que lo hará inmediatamente;

f) No demorar el estudio de la causa en el caso a que se refiere el artículo 59, más de 20 días, y de 40, en el del artículo 61.

Las dos reglas precedentes rigen para la cámara, en casos análogos.





Art. 29. — Se consideran como partes, la persona que acciona y la que se exceptiona en el juicio civil ordinario o en cualquier otro, para hacer valer un interés en litis:

a) Cuando el interés pertenece al estado, a una comuna, a una institución pública o de beneficencia, a una corporación, a una sociedad, o a algún otro ente análogo accionan o exceptonan la persona o personas a las cuales la ley, los estatutos o el contrato que las han organizado le atribuyen la representación o en su defecto la persona que tiene facultad para entenderse con los terceros;

b) Si el interés pertenece a una sociedad o a un grupo que no forman un ente colectivo distinto de la persona de los asociados, accionan y exceptonan la persona o personas a quienes los socios les han conferido la presidencia o la dirección;

c) En defecto de las reglas precedentes el juez designará la persona que debe intervenir como parte, eligiéndola entre los asociados, salvo disposición en contrario de la ley;

d) Los que han concertado la relación jurídica no pueden negarse recíprocamente la calidad de partes, a no ser por hechos sobrevinientes que se expresarán concretamente;



e) Al interponerse la demanda y al contestarla, o en la primera actuación que produzcan, los que litiguen por otro deberán justificar su personería;

f) Se admitirá fianza real cuando el procurador pueda justificar su personería, en plazo breve, que fijará el juez. Vencido éste caducará la personería;

g) La personalidad de las partes no se modifica por cesión, salvo conformidad expresa, y sus obligaciones en el pleito continúan siendo las mismas.

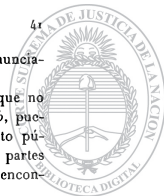
Art. 30. — En el primer escrito que se presente al juez o tribunal, o en el acto en que se intervenga se fijará domicilio legal dentro de dos kilómetros del asiento del juzgado y se denunciará el domicilio real, que en ese momento tenga el mandante. Si no cumpliese con esta prescripción se tendrá como tal domicilio, el que fije o corresponda al mandatario. Si el mandatario no hubiese fijado domicilio se considerará como tal la secretaria, sin perjuicio de que el juez le intime constituya dentro de tercero día su domicilio legal, bajo apercibimiento de ser notificado por ministerio de la ley.

Cualquier cambio de domicilio, tanto del interesado como del que obra a nombre ajeno, debe hacerse saber al juez dentro de los diez días. Igual obligación incumbe a los que intervienen personalmente en los juicios.

Las notificaciones se harán válidamente en el domicilio real denunciado, cuando ellas procedan, sin que pueda probarse que se había cambiado, si el hecho no se puso en conocimiento del juez de la causa.

La obligación de constituir domicilio, en la forma y con las sanciones de este artículo, rige también para todos aquellos que a cualquier título intervengan en el juicio o a quienes se mande que lo fijen al hacerse saber una resolución.

El domicilio, constituido que sea, se reputará subsistente para todos los efectos legales, mientras no se designe otro.



Terminado el pleito desaparecen los domicilios denunciados, como los constituidos.

Art. 31. — A los efectos de recibir notificaciones que no hayan de hacerse en la forma del artículo 13, inciso *b*, puede constituirse un apoderado especial, por instrumento público. Ese apoderado puede serlo de una o más de las partes que intervengan en el litigio, aunque tengan intereses encontrados.

Art. 32. — Los jueces pueden entregar a las partes una credencial, suscrita y sellada, donde conste el nombre de éstas, la carátula del expediente y el nombre del juez y secretario, autorizándolas para solicitar antecedentes, tales como informes de los bancos, oficinas públicas de la Nación, provincias o municipalidades, según los casos; copias de documentos públicos o de parte de ellos, certificados, etc. Para ello es menester que se trate de hechos concretos, atinentes al litigio, autorizados por la ley y claramente individualizados. La parte que no entregara un informe, después de haberlo conseguido, podrá ser multada hasta doscientos pesos, en beneficio de la parte contraria. En la expedición de esos informes, copias, certificados o antecedentes, se hará constar que sólo podrán ser usados para el litigio, bajo la misma sanción.

Art. 33. — La representación en juicio se regirá por las disposiciones de la ley 10.996, en cuanto no se opongan a la presente y por las siguientes reglas:

a) Los apoderados o procuradores acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la competente escritura de poder;

b) Una vez aceptado el poder por el hecho de presentarse a ejercerlo, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes imponen al mandatario. En los casos de condenación en costas, los apoderados o procuradores de la parte condenada sólo responden de las causadas en la actuación del juicio, pero



no de los honorarios del abogado, peritos o procurador de la parte vencedora, a menos que expresamente se hubiesen obligado a ello. Los apoderados y procuradores están obligados a seguir el juicio mientras no hayan cesado legalmente en el cargo;

c) Mientras continúe el apoderado o procurador en su cargo, los emplazamientos, citaciones, notificaciones que se hagan, incluso la de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hiciesen al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste;

d) El poder conferido para un pleito determinado, cualquiera que sean sus términos, se entiende comprender la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias a que haya lugar. Se entenderá también que comprende la facultad de intervenir en los incidentes de lo principal y ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial o los reservados expresamente en el poder;

e) La representación de los apoderados o procuradores cesa :

1° Por revocación expresa del poder, luego que sea admitida judicialmente; la intervención directa del mandante en los autos no revoca el mandato; 2° por renuncia; 3° por haber terminado la personalidad con que litigaba el poderdante; 4° por haber concluido el pleito para el que se le dió el poder; 5° por muerte o inhabilidad del apoderado;

f) En caso de renuncia del apoderado deberá continuar sus gestiones hasta que haya vencido el término señalado al poderdante o representante legal para reemplazarlo, bajo pena de daños y perjuicios. Si al vencimiento del término señalado no compareciere el poderdante, por sí o por medio de otro apoderado, el juicio continuará en su rebeldía.

Al revocarse el poder, se designará por el mismo acto nuevo mandatario, si no empieza a intervenir personalmente sin que



se paralicen por este motivo las actuaciones. Si falleciera el mandatario, dentro de los diez días de habersele hecho saber personalmente o por cédula al mandante, éste deberá designar reemplazante, bajo apercibimiento de continuarse las actuaciones en rebeldía.

En los casos en que en un juicio, de cualquier naturaleza que sea, intervengan más de una persona por derechos análogos, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar se unifique la representación. Antes de hacerlo ordenará se cite a las partes, personalmente o por cédula, a una audiencia y se resolverá en el mismo acto expresando las razones en que se funde. De la audiencia no se levantará acta, dejándose simple constancia de haberse celebrado.

La parte que por pasión o inexperiencia obstruya la causa no será oída hasta que no designe representante. El auto que así lo resuelva es apelable en un solo efecto.

Art. 34. — Al deducir la demanda y al contestarla, respectivamente, cada parte acompañará un sello de diez pesos, al que se irán imputando las reposiciones. Agotado el valor del sello, la parte que debiera renovarlo será intimada, mediante notificación por correo, para que lo haga dentro de tercero día, bajo apercibimiento de multarla por el décuplo, a beneficio de la parte contraria, la que agregará el sello.

Transcurrido este plazo se hará efectiva la multa, sin más trámite, librándose mandamiento de ejecución y embargo en incidente por separado, sin paralizar los autos principales.



Art. 35. — La imposición de costas se rige por las reglas siguientes :

a) El vencido será siempre condenado a su pago. El juez, sin embargo, podrá eximirlo de ella, total o parcialmente, siempre que encuentre mérito, sobre lo que hará declaración expresa y motivada ;

b) Cuando el vencedor lo sea sólo parcialmente, pueden compensarse ;

c) El demandante pagará las costas del litigio si el demandado reconoce inmediatamente como bien fundada la acción, a menos que haya dado lugar al litigio, con su actitud ;

d) El litigante rebelde, o renuente en una diligencia judicial, pagará las costas que hubiere ocasionado con su actitud ;

e) Las costas de una prueba manifiestamente inútil son a cargo de la parte que la propuso, aun cuando la sentencia le sea favorable en lo principal ;

f) Si el procedimiento se anulase por causa imputable a una de las partes, al juez, tribunal o funcionarios que intervengan en el juicio, serán a su cargo las costas hasta colocar los autos en el mismo estado en que se hallaban antes de la nulidad ;

g) Si la condenación en costas recae sobre varios, se distri-

buirá entre ellos, salvo que por la naturaleza de la obligación material del litigio fuere ésta solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofrezca considerables diferencias, podrá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés.



HONORARIOS



Art. 36. — En materia de honorarios se observarán las reglas siguientes :

a) Los abogados y procuradores deberán fijar por escrito y con anticipación, con sus clientes o patrocinados, el importe de sus derechos y honorarios respectivos en cada caso. Sólo se aceptará la prueba escrita y a falta de ella los abogados o procuradores perderán el derecho a cobrar honorarios, salvo los casos de excepción que establezca esta ley ;

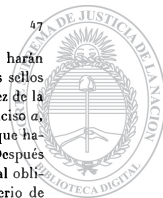
b) La regla precedente no es aplicable en los casos de nombramiento de oficio o en que existan incapaces, o cuando por escrito las partes convengan que los honorarios serán fijados por el juez al terminar la gestión o juicio respectivo ;

c) En caso de contrato escrito, si se produjera la separación del abogado o procurador antes de la terminación del juicio, el juez fijará los honorarios proporcionalmente al trabajo realizado y al monto convenido, lo que hará a petición de cualquiera de las partes.

La regulación de honorarios a favor del vencedor confiere al abogado o procurador acción contra el mandante o patrocinado, si no la ha ejercido con anterioridad el dueño del pleito ;

d) Los abogados, procuradores y demás personas que inter-

vienen en un juicio, cuando no sea el caso del inciso a, harán la estimación de sus honorarios y la liquidación de los sellos o derechos que hubieren abonado y la presentarán al juez de la causa, en la forma que se establece por el artículo 49, inciso a, con indicación del número de escritos y audiencias en que hayan intervenido y la foja donde corren los mismos. Después de comprobarse su exactitud por secretaría se dará vista al obligado al pago. Esta vista no puede notificarse por ministerio de la ley. Oída la parte a quien se le corrió vista o vencido el término, sin que ésta se haya expedido, el juez resolverá sin más trámite. Del auto puede apelarse en el término de tercero día y el superior resolverá en la misma forma, salvo que decidiere pedir los autos principales por un término que no exceda de tres días. Los autos serán elevados y devueltos de oficio, y sin más trámite, por medio de la secretaría.



REBELDÍA

Art. 37. — La rebeldía se regirá por las reglas siguientes :

a) No compareciendo un litigante en virtud del emplazamiento, o no contestando la demanda en el término señalado, el proceso será substanciado en rebeldía, si la acusare su adversario ;

b) La rebeldía podrá acusarse por escrito o de palabra, extendiéndose en este caso por diligencia que firmará el que la acuse ;

c) Declarado en rebeldía el demandado, el actor obtendrá lo que pidiere si fuere justo. Declarado el actor, el demandado será absuelto. La declaración de rebeldía constituye presunción de la verdad de los hechos lícitos afirmados por el que obtuvo esa declaración ;

d) Para mejor proveer en rebeldía el juez podrá mandar practicar de oficio la prueba que estime conveniente, con tal que no sea la de testigos ;

e) Cuando fundándose la demanda en un mismo título y teniendo un mismo objeto contra diferentes personas, las unas incurran en rebeldía y las otras no, el juez podrá suspender su decisión, respecto a los rebeldes, hasta pronunciar sentencia definitiva, que comprenda a todos los demandados ;

f) Al rebelde se le admitirá la prueba que ofrezca, si se hu-



biese presentado antes de que la causa se encuentre para celebrarse el juicio oral. Si se presentase después de esa oportunidad su prueba y la que sirva para desvirtuarla, se admitirá en segunda instancia. En ambos casos las costas serán a cargo del rebelde, aunque resulte vencedor en la causa.



JUICIOS SUMARIOS Y SUMARÍSIMOS

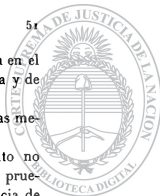
Art. 38. — Exista o no juicio pendiente, si se trata de a expedición de testimonios de escrituras o documentos, o de estatuir provisoriamente sobre medidas conservatorias de cosas o personas, embargos preventivos, autorización a menores para contraer deudas, accidentes del trabajo; o de comprobar, en casos que no admiten demoras, el estado de cosas o mercaderías, daños causados por delitos o cuasidelitos, perjuicios ocasionados por incendios, o en otras circunstancias análogas a las enumeradas, o de impedir que se innove en la cosa litigiosa, se procederá según las reglas siguientes :

a) El pedido se deducirá ante el juez de turno ; si éste no se encontrare en su despacho lo certificará el secretario ante quien se presente, y el peticionante podrá recurrir al reemplazante legal de aquel funcionario, y así sucesivamente ;

b) El juez resolverá inmediatamente lo que corresponda, con o sin audiencia de los interesados. En caso de que citara a las partes, a testigos o peritos, señalará un breve término, que puede ser de horas, y ordenará que la notificación se haga por telégrafo o por correo o por intermedio de la policía ;

c) Todos los días y horas son hábiles para este procedimiento ; en él no se correrá traslado o vista a los ministerios públicos, ni a las partes. La audiencia que se les dé consistirá en





hacerles saber que se va a practicar determinada medida en el lugar y hora fijado, y que tienen derecho a asistir a ella y de formular las protestas escritas que crean pertinentes ;

d) Es privativo del juez exigir o no fianza al decretar las medidas de seguridad enunciadas ;

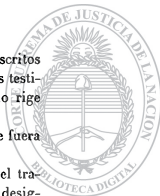
e) Las resoluciones adoptadas con este procedimiento no perjudica el fondo del asunto ; sin embargo, cuando las pruebas recibidas en el mismo lo hubieran sido con audiencia de partes, o fueran de imposible reproducción, serán válidas para lo principal ; pero la parte perjudicada podrá en todo caso producir pruebas para desvirtuar aquéllas ;

f) Sólo es apelable la resolución que decida la incidencia final y el recurso procede en un solo efecto ;

g) En este procedimiento no es admisible la recusación del juez, ni la del secretario que actúe en el mismo ; pero éstos deben excusarse cuando tuviesen causa legal.

Art. 39. — Por análogos trámites a los establecidos en el artículo 38, pero con audiencia de las partes, se procederá en los casos siguientes : alimentos y litis expensas ; disenso ; ejercicio de la patria potestad ; tenencia de hijos ; autorización para comparecer en juicio ; declaratoria de pobreza ; habilitación para ejercer el comercio ; informaciones *ad perpetuam* de testigos muy ancianos, o que estén por ausentarse ; protocolización o exhibición de testamentos u otros documentos ; acción de indemnización especial por accidentes del trabajo (art. 15 y 17 de la ley n° 9688) ; reposición de títulos ; consignación, y demás casos análogos que determine el juez.

Art. 40. — Presentada la solicitud se mandará ponerla en conocimiento de los interesados y del fiscal y asesor cuando proceda, a quienes se hará entrega de las copias de la misma y documentos con que se instruye, y se les notificará por cédula o personalmente para que comparezcan a la audiencia que se designe con las pruebas de que intenten valerse.



Antes de la audiencia las partes pueden presentar escritos sosteniendo sus derechos y deben pedir la citación de los testigos que no pueden traer a la misma. Análogo principio rige para las demás pruebas.

Para la recepción de la prueba que haya de practicarse fuera del asiento del juzgado se fijará un término prudencial.

Cuando se trate de la acción sumaria por accidentes del trabajo, el juez, al convocar a las partes para la audiencia, designará de oficio uno o más médicos, para que examinen al accidentado, si viviere, y presenten su informe dentro del plazo que se les fije, bajo pena de cien pesos de multa.

No es necesario designar médicos cuando existiese al respecto un informe del Departamento nacional del trabajo.

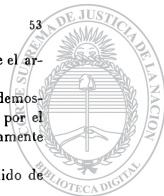
La resolución que dicte el juez contendrá, en los casos del artículo 39, un resumen de los hechos que se hayan probado en la audiencia. Las declaraciones de hecho, en este caso, no obligan a la cámara, quien podrá mandar se reciban, ante ella nuevas pruebas.

Art. 41. — Puede el juez sin audiencia de parte, y en caso en que lo que se reclama esté comprobado por instrumento público, dictar una condenación de dar, de hacer o de no hacer alguna cosa, fijando plazo para que se reclame de la misma. Si no se formulare reparo, la condenación se llevará a cabo. Si se hiciese oposición, deben darse las razones, y el actor tendrá que recurrir a la vía que corresponda y lo actuado quedará sin efecto.

Para que se lleve a efecto la condenación es indispensable :

a) Que la notificación se haya hecho personalmente y no por cédula, dejada a terceros ;

b) Que en el auto se le haga saber el derecho que tiene de oponerse y el término dentro del cual ha de formularla ; y que en caso de formularse oposición serán a su cargo las costas del juicio a iniciarse y las del incidente, si el actor obtiene todo lo que pretendía.



Art. 42. — Para obtener las medidas a que se refiere el artículo 38 se tendrán en cuenta las siguientes reglas :

a) *Pedido de alimentos.* — El que los solicita deberá demostrar que se encuentra en alguno de los casos previstos por el Código civil (art. 367 y sig.), y justificará aproximadamente el caudal del alimentario ;

Lo que precede es aplicable, en lo pertinente, al pedido de litis expensas ;

b) *Depósito de personas.* — Procede :

1° De menor o incapaz, que trate de contraer matrimonio contra la voluntad de su padre, tutor o curador, y en los casos autorizados por el Código civil ;

2° De menor o incapaz, que no tenga representante legal, o sea abandonado o maltratado, o inducido a actos reprobados por la ley o la moral ;

3° De menor o incapaz, que fuere abandonado por la persona a cuyo cargo estuviere ;

4° De la menor que pretenda casarse, contra el consentimiento de sus padres ;

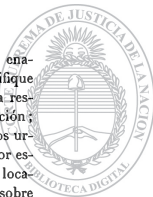
c) *Embargo preventivo.* — Puede pedirlo en general, el acreedor que justifique su crédito en instrumento que traiga aparejada ejecución o en documento privado cuando abone la firma de este último.

Procede además :

1° Cuando fundándose la acción en un contrato bilateral se justifique la existencia de éste, debiendo, además, acreditarse el cumplimiento del contrato por parte del actor, o si éste ofreciese cumplirlo o su obligación fuese a plazo (Cód. civil, art. 1201) ;

2° Cuando la deuda esté justificada por los libros de comercio, llevados en debida forma, si la medida se pide contra un comerciante ;

3° Cuando sujeta la deuda a condición, suspensión o pen-



diente de plazo, el actor justifique que su deudor trata de enajenar, ocultar, transportar sus bienes, o siempre que justifique que por cualquiera causa ha disminuído notablemente la responsabilidad de su deudor, después de contraída la obligación;

4° Cuando el propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento por escrito, acompañando el título de propiedad o exigiendo al locatario que haga las manifestaciones necesarias, lo pida sobre las cosas afectadas a su privilegio;

5° Cuando las personas a quienes las leyes reconocen privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, lo pidan sobre los mismos;

6° Cuando se intente una acción reivindicatoria, siempre que *prima facie* aparezca verisímil la acción;

7° Cuando por confesión expresa o ficta, en juicio ordinario, resulten probados hechos que hagan presumir verisísimamente el derecho alegado; o siempre que el que lo solicita hubiera obtenido una sentencia favorable, o una declaración de rebeldía contra su adversario;

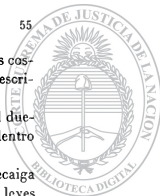
8° Cuando se demande por petición de herencia, con igual justificación que la determinada en el número 6° de este artículo;

9° En los demás casos que las leyes determinen.

Art. 43. — Si se decreta un embargo sobre cosas fungibles, o de difícil o costosa conservación, se ordenará la venta de las mismas, por el martillero que designe el juez, a menos que el deudor depositare el importe de lo que se le reclama.

Art. 44. — El mandamiento de embargo cuando no se refiere a cosas determinables, expresará la suma a embargar, y en todos los casos la orden de allanamiento de domicilio, entendiéndose incluída siempre la habilitación de días y horas, para que el funcionario ejecutor solicite, inmediata y previamente el auxilio de la fuerza pública.

Art. 45. — El oficial de justicia embargará los bienes indi-



cados o los suficientes para cubrir la suma reclamada y las costas en ambos casos, procediendo en el orden y forma prescritos para el juicio ejecutivo.

Practicado el embargo, si no hubiese estado presente el dueño de los bienes le dejará nota en forma de notificación, dentro de los tres días, haciéndole saber la traba.

En todos los casos en que el embargo preventivo no recaiga sobre cosas afectadas a un privilegio reconocido por las leyes generales, podrá el demandado pedir que se deje éste sin efecto, depositando a la orden del juez una cantidad suficiente, o dando caución para responder de las sumas que se reclamen y de las costas.

Si el dueño de los bienes embargados lo exigiera, la demanda deberá ser deducida en el preciso término de ocho días; y no haciéndolo se alzará el embargo y el actor será condenado, a más de las costas, en los daños y perjuicios.

Art. 46. — El depositario de bienes embargados deberá presentarlos inmediatamente que el juez se lo ordene, de oficio o a requerimiento de parte, debiendo ser detenido si no lo hiciere.

En este caso se remitirán sin más trámite los antecedentes al juez del crimen que corresponda, a cuya disposición se pondrá al acusado.

Art. 47. — a) En todos los casos en que habiendo lugar a embargo preventivo éste no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes al deudor, podrá solicitarse contra él, la inhibición general de gravar o vender sus bienes, la que se dejará sin efecto tan luego como presente a embargo bienes, o diere caución bastante.

El litigante que tenga que oponer a terceros adquirentes que no sean partes en el juicio, la sentencia que deba recaer sobre los inmuebles, objeto del mismo, tendrá derecho a pedir que se anote en el registro de hipotecas, embargos o inhibiciones, que dichos inmuebles están en litigio.



La anotación se presume conocida por terceros ;

b) Para obtener declaratoria de pobreza es menester justificar que existe dicho estado y la imposibilidad de obtener recursos.

La declaratoria lleva implícita la condición de servir mientras permanezca el interesado sin mejorar de fortuna.

El declarado pobre no tendrá responsabilidad efectiva para el pago de honorarios, derechos, depósitos, etc., que reembolsará si llegare a mejor fortuna.

Art. 48. — El procedimiento sumarísimo procede : si se trata de resolver cuestiones entre socios, que surjan durante la vigencia de las sociedades civiles o mercantiles y que no tiendan a su disolución ; en los contratos de locación, compraventa, depósito, concordato, transportes, etc., en análogos casos ; en los seguros, si se trata de establecer la existencia de mercaderías o comprobar el cumplimiento de cláusulas especiales de la póliza que puedan producir caducidad de la misma, o designación de peritos que deben actuar antes del juicio ; en las dificultades sobre medianería de cercas o paredes, que no tienden al pago de la misma ; entre principales y dependientes o factores, y en otras situaciones análogas.

En esos procedimientos se establecen las reglas siguientes :

a) La reclamación se hará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50, y en forma análoga procederá la parte contraria.

El juez ordenará que se entreguen las copias al interesado ; en el mismo auto citará a las partes a una audiencia próxima para que comparezcan con las pruebas pertinentes, a discutir su derecho.

Si fuese indispensable practicar una pericia urgente, el juez hará de oficio la designación del perito, en la misma providencia en que convoque a las partes a audiencia ;

b) Llegado el día de la audiencia, el juez la celebrará con la parte que concurra y dictará, sin levantar la misma, la resolución

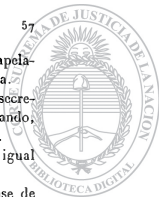
que corresponda, declarando si en caso de interponerse apelación, dentro del día siguiente, se cumplirá o no la misma.

Presentada que sea la apelación, dentro del término, el secretario elevará el expediente sin más trámite a la cámara, dejando, en su caso, copia de la resolución para su cumplimiento.

La cámara resolverá la incidencia sin más trámite y en igual forma ordenará la devolución de los autos ;

c) En este procedimiento no es admisible ninguna clase de recusación, pero las partes podrán hacerlas presente por lo menos la víspera de la celebración de la audiencia. Si el juez se excusare, se celebrará en la fecha ya fijada y ante el juez subrogante. El juez o vocal de cámara a quien se pruebe que estaba impedido de entender en un asunto y a sabiendas dicte en él resolución que no sea de mero trámite será penado con una multa de quinientos pesos a beneficio del fondo de educación común. Esta regla es de carácter general ;

d) Cuando no se hubiera podido recibir toda la prueba ofrecida por las partes, el pronunciamiento sobre la cuestión revestirá carácter provisorio que puede reverse en otro juicio sumario u ordinario, según corresponda, después de cumplirse, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 131, inciso h.



INCIDENTES

Art. 49. — Las cuestiones que versen sobre recusación, per-
sonería de las partes después de trabado el pleito o cuestión,
revocatoria de rebeldía, perención de instancia, recurso de he-
cho, aplicación de correcciones disciplinarias a las partes o a
terceros, nulidad de notificaciones o procedimientos en prime-
ra instancia, levantamiento liso y llano de embargos y otras
que tengan relación más o menos directa con los autos princi-
pales en que se promuevan, se substanciarán en incidente por
separado de acuerdo con las reglas siguientes :

a) El que promueva el incidente debe presentar :

1° Copia de la carátula de los autos principales, a la que
se agregará la palabra incidente y el motivo del mismo ;

2° En foja por separado, el nombre y domicilio de las par-
tes y de sus apoderados y la indicación de los días señalados
para oír providencias ;

3° Copia de la providencia de que se recurre ;

4° La foja donde esos antecedentes corren y las otras indi-
caciones que tiendan al esclarecimiento de la verdad, o que
ordene agregar el juzgado ;

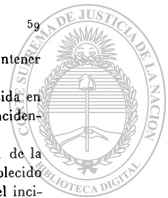
5° La prueba de que intente valerse el que promueva el
incidente, en la forma establecida para la demanda ;



Cuando el incidente se promueva de oficio debe contener análogas indicaciones;

b) Se imprimirá al incidente la tramitación establecida en el artículo 40. De la resolución mandando formar el incidente se pondrá nota en los autos principales;

c) La promoción de un incidente no es suspensiva de la tramitación de la causa principal, cuando no ha establecido expresamente lo contrario la ley. Resuelto que sea el incidente se notificará por cédula y si se apelare se elevará a la cámara a quien corresponda, la que se pronunciará sin más substanciación, salvo el caso de haberse recusado en la oportunidad del artículo 85, y ordenará se devuelvan los autos sin más trámite al inferior.



DEMANDA Y CONTESTACIÓN

Art. 50. — En la demanda se observarán las siguientes reglas :

a) Será escrita y contendrá el nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio del demandante ; la fecha ; el juez ante quien se deduce ;

b) Se expresará el nombre y domicilio del demandado y además las individualizaciones del inciso anterior si se conocieren ;

c) Se hará la designación precisa de lo que se demanda. Se fijará el valor de lo reclamado si fuera posible. El exceso de apreciación pecuniaria se tendrá en cuenta en la imposición de las costas ;

d) Se separará, las cuestiones de hecho de las de derecho. Las primeras serán numeradas y expuestas en forma clara y sintética, omitiéndose toda glosa o comentario que se podrá hacer en la parte general del escrito. Al enunciarse cada hecho se ofrecerá la prueba de que el actor intentara valerse para demostrarlo, acompañándose los interrogatorios, la nómina de los testigos y el pliego de posiciones ;

e) Se acompañarán todos los documentos que sirvan para probar la acción. Si no los tuviere el actor en su poder indi-



cará cuáles son y el lugar en que se encuentran, así como el hecho concreto que se trata de demostrar con ellos y la parte pertinente que se invoca.

Se considerará que el actor tiene en su poder los documentos cuando existan en los archivos, oficinas públicas o protocolos de escribanos, de la circunscripción donde el juez de la demanda ejerza jurisdicción territorial ;

f) Podrán acumularse en una sola y misma demanda diversas reclamaciones del demandante contra el demandado, aun cuando estén basadas en motivos diferentes, siempre que el mismo juez o tribunal sea competente y sea admisible el mismo procedimiento para su substanciación. Procede, también, la acumulación de varios contra uno o varios, siempre que la acción se funde en el mismo título.

En la demanda el actor comprenderá todas las causas de reclamación que tenga contra el demandado, en la acción deducida de tal manera que terminado el pleito no podrá renovarse más adelante.

Art. 51. — El actor puede, dentro de los cinco días de contestada la demanda, ofrecer nuevas pruebas, pero sólo para desvirtuar las afirmaciones del demandado.

Art. 52. — Presentada la demanda el juez examinará si se encuentra en forma y en caso negativo mandará subsanar los defectos de que adolezca, indicándolos concretamente. Después correrá traslado por quince días al demandado. Si este residiese fuera del lugar del juicio le concederá el término extraordinario que corresponda a la distancia y a la facilidad o dificultad de las comunicaciones. Si se hubiere propuesto excepciones previas, la contestación se hará dentro de los seis días de resueltas definitivamente, salvo el caso del artículo 56, párrafo segundo.

Art. 53. — A la contestación de la demanda son aplicables las disposiciones anteriores en lo pertinente.



En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones perentorias y dilatorias que tuviere, salvo las del artículo 55.

El demandado deberá además confesar o negar categóricamente los hechos establecidos en la demanda, en la inteligencia de que su silencio o sus respuestas evasivas se estimarán como un reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos expuestos en la demanda. Sino se contesta la demanda se declarará la rebeldía, pidiéndolo el actor.

Art. 54. — La prescripción y la reconvencción sólo pueden oponerse en la contestación de la demanda.

En estos casos se correrá, traslado al actor por cinco días y es aplicable lo establecido para la demanda y contestación.

El demandante y el demandado, de común acuerdo, pueden presentar al juez la demanda y contestación en la forma de los artículos 50 y 53, para que se les convoque directamente a juicio oral y se falle la causa, siguiéndose los trámites marcados en el artículo 61 y siguientes.



EXCEPCIONES DILATORIAS

Art. 55. — Las excepciones dilatorias proceden sólo en forma de artículo previo en el juicio ordinario y deben oponerse seis días antes por lo menos de que venza el plazo para la contestación de la demanda. Son admisibles como tales, únicamente : la de incompetencia de jurisdicción, fuera del caso del artículo 4° de este código, la de personería, por falta de poder del que se dice mandatario, o de capacidad del mismo o del dueño del pleito para estar en juicio, y la de evicción.

La excepción de incompetencia se rechazará sin más trámite, si quien la opone no indica el juez que considera competente para conocer en la causa. Es aplicable a esta excepción lo dispuesto en el artículo 9°, inciso *d*.

Art. 56. — Opuestas las excepciones previas que deberán serlo al mismo tiempo, se hará saber por cédula al demandante, a quien se le entregará copia de las mismas para que la conteste dentro de seis días. El demandante en este escrito puede pedir que el juicio principal continúe adelante ; pero si prospera la excepción previa las costas de lo principal serán a su cargo y se anulará lo hecho.

En el escrito en que se oponga la excepción de evicción, se observarán, además, las siguientes reglas :





1° Se indicará el nombre y domicilio del enajenante a quien se cita (art. 2109 del Cód. civil);

2° Se pedirá que se le haga saber la demanda con las copias y documentos con que se instruya, y la obligación que tiene de fijar domicilio legal en el asiento del juzgado dentro del término que se le señale, a efecto de notificarle oportunamente que ha empezado a correr el término para contestar la demanda, si se hace lugar a la excepción;

3° Si el citado cree que debe citar a su vez a alguno de sus enajenantes tiene la obligación de presentarse al juez de la causa dentro del término de diez días y proceder conforme a lo establecido respecto del demandado y así sucesivamente;

4° Cuando el demandado no cumpliera con las obligaciones precedentes, o no hiciere notificar al citado personalmente, o por edictos (en caso de ignorar su domicilio), en el término que se le fije, se le tendrá por desistido de la excepción. Cuando quien no cumpla con las obligaciones que se le imponen fuere el citado se considerará que renuncia salir a la defensa del demandado y a citar a su vez de evicción, y la causa principal seguirá adelante.

Art. 57. — Si se ha ofrecido prueba en el escrito de excepciones o en el de contestación se recibirá en la forma establecida para el juicio ordinario, reduciéndose los términos prudencialmente por el juez. Después se dictará resolución, admitiendo o rechazando la excepción, con costas.

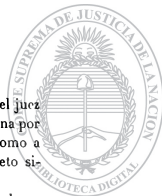
Art. 58. — La citación de evicción suspende en todo caso la prosecución del juicio principal, hasta que se decida sobre ella.

PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL

Art. 59. — Producida la contestación de la demanda, el juez estudiará la causa y después la mandará poner en la oficina por cinco días y en el mismo auto convocará a las partes, como a sus apoderados, notificándolas por cédula, con el objeto siguiente :

- a) Para tentar una conciliación, pudiendo sugerir las bases de la misma, sin que ello importe prejuzgamiento ;
- b) Para que las partes absuelvan posiciones que propongan las mismas o el juez. Cualquiera de las partes que no presentase el pliego de posiciones en la oportunidad que este código determina, perderá el derecho de valerse de esta clase de prueba. Si la parte que debe absolver posiciones residiere fuera del lugar del juicio, en la resolución que mande agregar la contestación de la demanda, se ordenará se libre oficio para que lo haga, ante el juez que corresponda ;
- c) Para que, si existen documentos no reconocidos o argüídos de falsos, las partes practiquen las indicaciones del caso a fin de proceder de acuerdo con lo prescrito en el artículo 72.

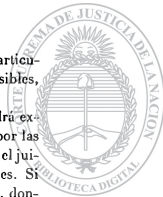
Art. 60. — Terminada la audiencia a que se refiere el artículo 59, el juez dictará resolución motivada, donde determinará la prueba a producirse sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente.



No se admitirá diligencias de prueba sobre hechos no articulados en la demanda o contestación, sobre hechos imposibles, notoriamente inverisímiles o ineficaces.

En la misma resolución fijará un término, que no podrá exceder de veinte días, para practicar la prueba ofrecida por las partes y declarada pertinente, que no pueda recibirse en el juicio oral, y ordenará se libren los oficios correspondientes. Si se tratare de prueba que haya de evacuarse fuera del lugar, donde funcione el juzgado o tribunal, se fijará el término dentro del cual ha de producirse, atendiendo a la facilidad de las comunicaciones.

En caso de que no se hubiere ofrecido prueba en los escritos de demanda y contestación, se prescindirá de los trámites precedentes y el juez convocará a las partes a juicio oral, una vez estudiado el expediente, y procederá a fallarlo sólo, sobre el hecho y el derecho. La cámara conocerá, en su oportunidad, de ambos extremos.



JUICIO ORAL



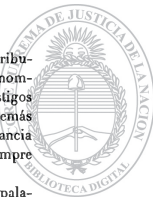
Art. 61. — Terminada la faz preparatoria del proceso el juez o jueces, en su caso, se instruirán privadamente del expediente, y si no ordenasen alguna medida para mejor proveer, convocará a las partes a juicio oral, el que se desenvolverá de acuerdo a las siguientes reglas :

a) Continuidad del procedimiento, de tal manera que en general no podrá suspenderse el acto hasta que no haya terminado ; entre una audiencia y otra sólo por motivos especiales podrá mediar un término mayor de 24 horas ;

b) Fallo inmediato sobre las cuestiones de hecho ; los jueces que resuelvan deben ser los mismos que asistieron a la recepción de la prueba producida en la audiencia ;

c) Publicidad de todos los actos, excepto la deliberación y emisión del fallo, o cuando el tribunal resuelva mantener reserva, por convenir a la moral y a las buenas costumbres ;

d) El día designado para el debate, el tribunal se presentará en quorum de cuatro jueces cuando menos, si se tratare de juicio ordinario y a la hora fijada el presidente, que será el juez de la causa, declarará abierta la audiencia con las partes que hayan concurrido. Si existiere vacante, o algún juez gozare de licencia o estuviere impedido se procederá a integrar el tribunal en la forma que corresponda ;



e) Inmediatamente se recibirá la prueba por el juez o tribunal. Se levantará acta de lo substancial, consignándose el nombre, apellido y demás circunstancias personales de los testigos y peritos. En análoga forma se procederá respecto a las demás pruebas a producirse. Podrá, sin embargo, dejarse constancia de alguna circunstancia especial, a pedido de parte y siempre que el tribunal lo considerase pertinente.

f) Concluida la recepción de la prueba se concederá la palabra a las partes y al ministerio público, cuando la ley expresamente le conceda intervención en el litigio, a objeto de que aleguen sobre el mérito de la misma.

El presidente llamará a la cuestión a las partes o abogados cuando se salieren de ella y podrá limitarles el uso de la palabra;

g) Acto continuo, el tribunal se retirará a deliberar para emitir su fallo. Si concurriesen jueces en número par uno de ellos, que no sea el presidente, será eliminado por sorteo antes de procederse a la votación;

El tribunal planteará las cuestiones de hecho que le hubieran sometido las partes en la demanda y contestación, si las considera pertinentes y además las que juzgue oportunas y sus jueces votarán en el orden que establezca el sorteo que debe practicarse;

h) Vueltos a la sala de audiencias se dará lectura del fallo sobre los hechos.

Al dar por probado cada hecho se indicará la fuente donde los jueces han formado su convicción.

Dictada la resolución sobre los hechos, el juez o presidente dentro de tercero día pronunciará la sentencia que corresponda.

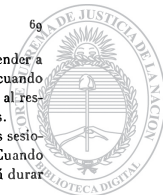
Art. 62. — Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores el tribunal goza de amplias facultades, dentro de los límites señalados expresamente por este código. Especialmente queda autorizado a separar a los magistrados remisos así como a los

inasistentes, sin motivo legal aducido en tiempo; suspender a abogados y procuradores y emplear la fuerza pública cuando sea necesario, para excluir de las audiencias al que falte al respeto debido a los magistrados, a las partes, o a testigos.

Art. 63. — El juicio oral continuará durante todas las sesiones consecutivas que sea menester para su terminación. Cuando hubiere diligencias que evacuar ninguna audiencia podrá durar menos de cuatro horas.

Art. 64. — En los juicios sumarios, sumarísimos especiales o incidentales, el juez funciona solo y la oralidad no es de rigor sino en la medida autorizada por este código.

Art. 65. — En la apreciación de la prueba rige el principio de las libres convicciones, salvo que se trate de reglas legales fijadas por el legislador.



Posiciones

Art. 66. — La prueba de posiciones queda sometida a las siguientes reglas :

a) La citación a la parte que deba absolverlas se hará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16, número 2°;

b) No es indispensable que las preguntas se redacten en forma afirmativa o negativa, pudiendo limitarse a pedir explicaciones sobre hechos atinentes a la causa;

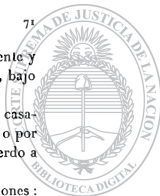
c) Aunque la absolución de posiciones fuese a instancia de parte, el juez puede formular las preguntas que estime conducentes al esclarecimiento de la verdad;

d) En caso de que la persona citada en forma no compareciere, se negare a contestar o lo hiciere en forma evasiva, el juez la tendrá por confesa en el acto, sobre los hechos pertinentes articulados en la demanda o contestación;

e) El absolvente contestará sintéticamente con precisión, por sí mismo y sin valerse de borrador, pero podrá consultar notas y apuntes, cuando a juicio del juez ello sea menester para el auxilio de la memoria;

f) La parte que ponga las posiciones podrá solicitar se haga





saber con anterioridad el contenido del pliego al absolvente y que éste lo evacúe por escrito u oralmente ante el juez, bajo el apercibimiento indicado en el inciso *d*;

g) Pueden ser llamados a absolver posiciones la mujer casada y el menor adulto, que comparezcan a juicio, por sí o por procurador, en virtud de autorización, conferida de acuerdo a la ley o por representante legal.

Art. 67. — No pueden ser llamados a absolver posiciones :

- a*) Los cónyuges en el juicio de divorcio (art. 70, ley de matrimonio civil) ;
- b*) El intendente municipal ;
- c*) El presidente del Banco de la Nación ;
- d*) El presidente del Banco hipotecario nacional ;
- e*) Cualquier otro jefe de repartición, que tenga facultad para estar, a nombre de la misma, en juicio.

Las personas, a que se refieren los incisos *b* a *e* absolverán posiciones por informe, a cuyo efecto se les pasará comunicación, fijándoles plazo y haciéndoles saber que en caso de no contestar el oficio dentro del mismo se les tendrá por confesos.

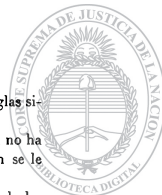
Art. 68. — La confesión judicial, prestada en debida forma, constituye plena prueba contra el confesante, salvo que recayere sobre hechos cuya investigación o reconocimiento prohíbe la ley.

Art. 69. — La confesión ficta o en rebeldía tendrá la misma fuerza que la expresa, salvo que fuese opuesta a la constancia de documentos fehacientes, de fecha anterior, que corriesen agregados al pleito.

Art. 70. — La confesión es indivisible.

Art. 71. — Las posiciones se recibirán antes de la celebración del juicio oral y se consignarán por escrito. Les es aplicable, en su forma, lo que se dispone para las declaraciones de testigos.

PRUEBA INSTRUMENTAL



Art. 72. — La prueba instrumental se rige por las reglas siguientes :

a) Se tendrá por reconocido el documento privado si no ha sido desconocido expresamente por la persona a quien se le atribuye o si contra ésta hay confesión ficta ;

b) Si se negare que la firma o letra que se atribuye o declarase no conocer la que se atribuyere a otra persona o se tachare de falso, deberá procederse a la comprobación del documento, por peritos que designará el juez y sin perjuicio de las demás medidas de prueba. La tacha de falsedad, para ser tomada en cuenta, debe expresar concretamente los motivos de la misma ;

c) Los interesados se pondrán de acuerdo, en la audiencia del artículo 59 sobre los documentos que han de servir para el cotejo y, en su defecto, se tendrá como tales :

1° Las firmas puestas en documentos auténticos ;

2° Los documentos privados reconocidos en juicio, por las personas a las cuales se les atribuye la que se trata de verificar ;

3° El impugnado en la parte que es tenido como cierto por el litigante, a quien perjudique.

A falta, o en caso de ser insuficientes los documentos de cotejo, podrá ordenar el juez que la persona, a quien se le atribu-

ye la letra, forme un cuerpo de escritura, que en el acto le dictará; si se negare a hacerlo se tendrá por reconocido el documento negado;

d) Si del documento impugnado existiere protocolo o matriz, el juez podrá disponer que sea traído a la vista, citando al efecto al escribano o funcionario, en cuya oficina se encuentra.





Art. 73. — Cuando se trate de la prueba testimonial se observarán las siguientes reglas :

a) Toda persona mayor de catorce años está obligada a declarar como testigo, bajo la sanción del artículo 243 del Código penal. Se exceptúan, sin embargo, los consanguíneos o afines en línea directa, hermano o afín en el segundo grado y el conyuge, aunque esté separado legalmente, salvo el caso en que la declaración versare sobre el nacimiento, defunción o matrimonio de los miembros de la familia ;

b) Los testigos serán examinados e interrogados sucesiva y separadamente, en el orden que determine el juez ;

c) Antes de declarar prestarán juramento en la forma acostumbrada, pero los menores de diez y seis años podrán ser examinados sin él.

El testigo, aunque las partes no lo pidan, será interrogado :

1° Por su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio ;

2° Si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado con alguno de los litigantes, si es criado, doméstico o dependiente suyo ; si es acreedor o deudor suyo ; si tiene interés en el pleito ;



d) Terminada la declaración se leerá y si se ratificare en la misma, el testigo la subscribirá, juntamente con los asistentes al acto;

e) El interrogatorio a cuyo tenor han de deponer los testigos se presentará abierto y en la oportunidad que determina el artículo 50, inciso d. Sólo pueden hacerse ampliaciones sobre los puntos que hayan sido materia de preguntas.

Art. 74. — Las partes pueden probar las circunstancias conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de las declaraciones de los testigos.

Art. 75. — Las circunstancias a que se refiere el artículo 73 inciso c, se presumen cumplidas y sólo se hará constar en el acta la declaración, el nombre, edad y apellido del testigo.

Art. 76. — Las declaraciones serán extendidas por el secretario, y en su caso, por el escribano o abogado designado de conformidad de partes a medida que se vayan prestando. Si el testigo, concluido que sea el interrogatorio, quisiera aclarar o rectificar sus declaraciones podrá hacerlo, dejándose constancia a continuación de su deposición.

Art. 77. — En el juicio oral no debe asentarse por escrito la declaración del testigo, ni es necesaria la firma del mismo.

PRUEBA DE PERITOS

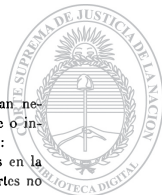
Art. 78. — La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria y se recibirá de acuerdo con las siguientes reglas :

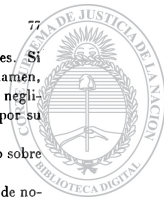
a) El juez hará la designación de uno o tres peritos en la oportunidad a que se refiere el artículo 59, si las partes no los proponen de común acuerdo ;

b) El perito deberá tener el título de tal, si la profesión u oficio estuviere reglamentado, pero si no lo estuviere, o si estándolo no hubiese perito en el lugar de juicio, podrá nombrarse cualquier persona entendida o práctica ;

c) El perito aceptará el cargo ante el secretario, dentro de tercero día de la citación, que deberá practicarse inmediatamente ; si no lo hiciese quedará de hecho sin efecto el nombramiento, designándose sin más trámite otro. Si aceptado el cargo no dictaminare, salvo causa justificada, dentro del término que siempre se le fijará prudencialmente, será substituído al día siguiente y condenado en las costas de las diligencias frustradas y en los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas reclamasen ;

d) El perito dictaminará por escrito fundando su opinión. Las partes podrán asistir a las diligencias cuando lo deseen,





al solo efecto de formular las observaciones pertinentes. Si fuesen más de uno los peritos practicarán juntos el examen, firmando un solo dictamen si estuvieren contestes. La negligencia de uno no excusará al otro, quien debe expedirse por su cuenta ;

e) La pericia deberá contener un resumen comprensivo sobre el cual versará la discusión en el juicio oral ;

f) El perito puede ser recusado hasta tres días después de notificado el nombramiento, por las mismas causas que los jueces y además por las siguientes :

1° Haber sido condenado por delito que tenga pena corporal ;

2° Ser ebrio consuetudinario ;

3° Concursado no rehabilitado, quebrado fraudulento, empleado o socio del litigante contrario ;

4° Cuando carezca de título, por incompetencia manifiesta ;

g) Deducida en forma se hará saber al perito para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días subsiguientes, manifieste si es o no cierta la causal. Caso afirmativo se le separará inmediatamente, designándose en el mismo auto el reemplazante. Si fuere contradicha el juez convocará a las partes a primera audiencia con las pruebas que intenten valerse y allí mismo fallará ; si esta fuere admitida, el reemplazante será nombrado en el mismo acto ;

h) Si alguna de las partes manifestare no tener interés en la pericia, la designación se hará a cargo de quien la hubiese solicitado, excepto cuando la primera resultase condenada en las costas del juicio y la diligencia hubiese sido necesaria para la solución del pleito, lo que el juez consignará en la sentencia.

Art. 79. — Los peritos, si cualquiera de las partes lo pidiere, serán citados para el juicio oral, a objeto de dar explicaciones al leerse la conclusión de su dictamen. Si no lo hicieren perderán el derecho de cobrar honorarios

Art. 80. — Los peritos que deseen ser nombrados se inscri-

birán en una lista en la cámara, indicando su domicilio real, donde se les citará por correo cada vez que se necesite su comparencia en el juicio. Si no concurrieren a aceptar el cargo, dentro de tercero día, se les nombrará reemplazante sin más trámite.



INSPECCIÓN OCULAR

Art. 81. — La inspección ocular se practicará a petición de parte, o de oficio, el día y hora que se designe.

El juez concurrirá personalmente a la misma, cuando haya de realizarse en el lugar del juicio. En caso contrario, puede delegarla.

Las partes pueden hacer al juez las observaciones que crean oportunas.

De las diligencias se levantará acta en la que se dejará constancia de las partes que han concurrido, de haberse practicado la inspección ocular y de las circunstancias que el juez determine.

Si las partes lo desean pueden hacerse asistir por peritos.



Art. 82. — La sentencia definitiva debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las conclusiones de hecho del juicio oral y a las acciones deducidas en el juicio, sin atenerse a la calificación dada por las partes, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo en todo o en parte. El juez debe apreciar y resolver todas las defensas pertinentes opuestas por las partes.

Al redactar la sentencia el juez designará la fecha y lugar en que se pronuncia, las partes litigantes y, concretamente, el objeto del pleito; y se pronunciará separadamente sobre cada uno de los puntos pertinentes.

Cuando la sentencia contenga condenación de frutos, intereses, daños o perjuicios, el juez fijará su monto, si ello fuere posible, y el término en que deberá ser abonado, el que no excederá de sesenta días.

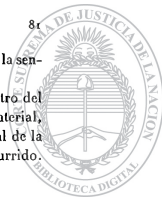
La sentencia fijará prudencialmente el importe del crédito o perjuicios reclamados, siempre que su existencia estuviere legalmente comprobada, y no resultase justificado ese importe.

La sentencia se pronunciará también sobre las medidas conservatorias solicitadas por las partes y sobre las costas, que se aplicarán teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35.



La jurisdicción del juez sobre lo principal, termina con la sentencia.

Puede, sin embargo, a petición de parte deducida dentro del día siguiente a la notificación, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión, y suplir cualquier omisión en que hubiere incurrido.



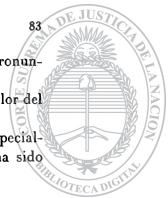
RECURSO DE APELACIÓN

Art. 83. — El recurso de apelación procede en un solo efecto, en ambos efectos o preventivamente. En el primer caso al concederse se suspenderá la jurisdicción del juez de primera instancia y se elevarán al superior los autos en que se recurre; en el segundo se elevará sólo el incidente, que afecte la causa principal, siguiendo ésta su curso, a menos que el superior ordene lo contrario en auto motivado; y en el tercero, interpuesto que sea el recurso, se mandará tenerlo presente para concederlo o denegarlo juntamente con el que se deduzca sobre el fondo, si se reitera el pedido en esa oportunidad. En este caso la cámara, al conocer el fondo del asunto, se pronunciará sobre las providencias apeladas, y si revocase, ordenará que se practiquen, en su caso, las diligencias omitidas, lo que hará uno o varios de sus vocales; o que se deje sin efecto lo hecho. La cámara puede decretar, si lo cree indispensable, la repetición ante ella del juicio oral de primera instancia, en cuya hipótesis conocerá del hecho y del derecho.

Art. 84. — El recurso de apelación se rige por las siguientes reglas:

a) Procede libremente o en relación, lo que marca el procedimiento a seguirse en segunda instancia. En la primera forma





se otorgará sólo cuando se trate de sentencia definitiva pronunciada en juicio ordinario. .

No es apelable, sin embargo, la sentencia cuando el valor del juicio no exceda de mil pesos;

b) El término para apelar en los casos no previstos especialmente es de cinco días y procede solamente cuando ha sido acordado el recurso expresamente por este código;

c) El recurso procede de ambos efectos :

1° En los casos a que se refieren los artículos 8°, 106, 114, 160, segundo apartado, 183, 188, 189, segundo apartado, y 190;

2° Cuando se trate de la resolución : que acuerda o niega autorización para contraer matrimonio, para ejercer el comercio, o sobre protocolización de testamentos, consignación e indemnización por accidentes del trabajo (art. 39);

3° En el caso en que se discute la substitución del embargo, o se declara que no se ha deducido en tiempo la acción (art. 45, apartados 3° y 4°);

4° Cuando se hace lugar a la perención de instancia (art. 105);

5° Si se rechaza la demanda de jactancia o se ordena deducir la acción (art. 111 y 112);

6° Si se trata de la sentencia que se pronuncia sobre la acción de desalojo, salvo disposición en contrario (art. 117);

7° Si la resolución versa sobre levantamiento de embargo (art. 134); adjudicación de bienes (art. 151); declaratoria de herederos (art. 163); fianza (art. 166); arrendamiento y venta de bienes (art. 168, 169 y 170);

8° Si la resolución no hace lugar al juicio de mensura (art. 196 y 209);

9° Si la resolución decide quién es el poseedor (art. 208, inc. d);

10° Si la resolución, en caso de cumplirse, paralizaría el juicio; o aprueba o desaprueba el inventario, avalúo o cuenta particionaria en las sucesiones;



11° Si se trata de aplicación de correcciones disciplinarias, remoción de depositarios, administradores o síndicos, imposición de penas, regulación de honorarios, autorización para vender, arrendar o gravar bienes, condenación en costas o pérdida del derecho a cobrar honorarios. En estos casos se formará incidente por separado, para no paralizar la causa principal;

12° Si en este código se ha declarado su procedencia.

d) El recurso procede en un solo efecto :

1° En los casos de los artículos 33, inciso *f*, 34, 47, inciso *a*, 48, 66, inciso *d*, 158, 164, 171;

2° Si el juez rechaza de plano la declinatoria (art. 9, inc. *d*);

3° Si se decreta la suspensión de los términos o niega la habilitación de días inhábiles (art. 11, inc. *d* y *f*);

4° Si se declara haber o no lugar a la nulidad del procedimiento o de una notificación;

5° Si no se hace lugar a la perención de instancia;

6° Si se resuelve sobre la posesión de los bienes embargados (art. 122, inc. *a*);

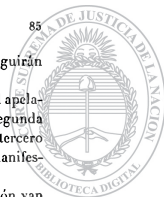
7° Si se revoca el auto de concurso civil (art. 140);

8° En los casos del artículo 39, no previstos especialmente en el inciso *c*, número 2, del artículo 84;

9° En los demás casos que la ley designe o cuando se trate de recurso extraordinario. Puede, sin embargo, en este caso, el juez o tribunal conceder el recurso en ambos efectos, según las circunstancias particulares de la causa o exigir fianza al apelado que desea ejecutar la sentencia;

e) Procede el recurso preventivamente en el caso de que se otorgue o deniegue una diligencia de prueba o se resuelva alguna incidencia en el juicio oral o de preparación del mismo;

f) Procede también el recurso de apelación en los casos que así lo resuelvan los tribunales en pleno, después de someterseles los antecedentes y de oídas las partes. El procedimiento a observarse será el establecido por este código para los inciden-



tes. Mientras no se resuelva la apelabilidad los autos seguirán su curso.

Art. 85. — Al interponerse la apelación manifestará el apelado si no se conforma con la composición del tribunal de segunda instancia. El apelado hará esa manifestación dentro de tercero día de concedido el recurso, no pudiendo, si falta esa manifestación recusarse sino por causas sobrevinientes.

Art. 86. — En la interposición del recurso de apelación van comprendidos los agravios que ocasione a la parte las nulidades atribuidas al procedimiento, o a la sentencia.

Las nulidades del procedimiento de primera instancia, sólo se podrá hacer valer, cuando se hubiere reclamado de ellas, con resultado negativo en primera instancia y apelado preventivamente.

El apelante deberá manifestar concretamente cuáles son las nulidades que pretende se han cometido.

Sólo puede invocarse como causal de nulidad la violación de las solemnidades de la sentencia o cuando en el procedimiento se han violado las formas substanciales del juicio, que consisten en la audiencia de las partes y en la denegatoria de la prueba a que tienen derecho.

La apelación puede siempre motivarse.

Art. 87. — Si se dedujere apelación por alguna de las partes que intervienen en el pleito, sin ser parte directa en el mismo, se procederá en la forma determinada por el artículo 49, en lo pertinente y después de pronunciarse el juez sobre su procedencia se elevará el incidente a la cámara.

RECURSO DE REPOSICIÓN

Art. 88. — El recurso de reposición procede contra toda resolución que no sea sentencia definitiva, o auto con fuerza de tal, a fin de que el mismo juez que la dictó la deje sin efecto. En el procedimiento escrito debe interponerse dentro de veinticuatro horas, y el juez lo decidirá sin audiencia de la otra parte.

En el procedimiento oral el recurso sólo procede en la misma audiencia en que se dictó la resolución, y el juez, después de oír a las partes presentes en el acto, resolverá lo que corresponda, dejándose simple constancia en el acta. El recurso no es suspensivo del procedimiento y se seguirá por cuerda separada en la forma de los incidentes.

La apelación en subsidio debe deducirse en el mismo escrito o acto en que se interpone la reposición, pero sólo en los casos del artículo 84.

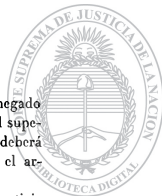


RECURSO DE HECHO

Art. 89. — Cuando la parte considere que se le ha negado indebidamente una apelación, puede ocurrir de hecho al superior, dentro del tercer día de la notificación. El escrito deberá instruirse con los recaudos pertinentes enumerados en el artículo 49, incisos *a* y *b*.

Art. 90. — Procede el recurso por denegación de justicia cuando transcurridos los términos para resolver, el juez no lo hubiere hecho, después de requerido por alguna de las partes y de pasados tres días.

La cámara, oído que sea el juez, hará lugar al mismo, si lo encuentra fundado, pudiendo aplicar las correcciones disciplinarias de apercibimiento, o multa hasta doscientos pesos.



PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

Art. 91. — En el procedimiento de segunda instancia se observarán las siguientes reglas :

a) En los casos de recurso libre, recibido el expediente en la cámara, el presidente llamará autos y las partes podrán, dentro de diez días comunes, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre la causa, que se mandará agregar sin más trámite. En la memoria manifestarán por escrito si insisten en que se resuelvan las apelaciones preventivas y que obstan al fallo de la cámara pudiendo aducir las razones que fundan su derecho ;

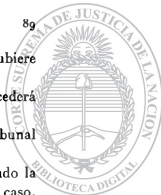
b) El tribunal hará el estudio de la causa y después resolverá los incidentes antes o en el acto de pronunciar la sentencia definitiva, según lo considere conveniente ;

c) Si la cámara resolviera los incidentes previos antes de la sentencia definitiva se procederá de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83, *in fine*, y después se citará a las partes a juicio oral para tratar el fondo del asunto. Lo mismo se hará cuando los incidentes hayan de decidirse al mismo tiempo que la sentencia definitiva.

Art. 92. — En el recurso en relación se aplicarán las siguientes reglas :

a) Llegados los autos, pasarán directamente, y previo sorteo,





a estudio de los jueces de la cámara, a menos que se hubiere hecho la manifestación del artículo 85 ;

b) Si hubiere incidentes previos a la sentencia se procederá como lo indica el inciso *b* del artículo anterior ;

c) Sólo se citará a las partes a juicio oral, cuando el tribunal lo considere conveniente.

Art. 93. — La sentencia revestirá forma de auto cuando la naturaleza de la cuestión lo permitiera y se ajustara, en su caso, a las declaraciones de hecho de primera instancia con la salvedad establecida en el artículo 65 ; será extendida en el expediente, dejándose copia de la misma en el tribunal.

Art. 94. — Los jueces del tribunal en caso de discordia, a quienes se les someta dos cuestiones contradictorias están obligados a votar por una de ellas ; cuando ninguna obtuviere la mayoría, el presidente las someterá a votaciones sucesivamente eliminatorias, hasta que una de ellas reúna los sufragios necesarios para ser consagrada.

Art. 95. — Tanto en el recurso libre como en el que se conceda en relación se aplicarán, además, las siguientes reglas :

a) El juicio oral puede renunciarse por las partes de común acuerdo ;

b) La prueba procede únicamente :

1° Cuando se alegue algún hecho nuevo conducente al pleito, ignorado antes, o posterior al término de prueba de primera instancia ;

2° Cuando algún hecho pertinente no hubiese sido admitido a prueba en primera instancia ; o por motivos no imputables al solicitante no se hubiese practicado la prueba por él ofrecida ;

3° Cuando el tribunal lo resuelva para mejor informarse ;

c) La prueba se hará según las reglas establecidas por este código para primera instancia, teniéndose en cuenta lo dispuesto por el artículo 83, *in fine* ;



d) En los incidentes y en todos aquellos casos en que no se trate de sentencia definitiva, si el recurso procede en relación, se observarán las reglas siguientes :

1° Llegados los autos al superior, se substanciará previamente la recusación de los jueces, si hubiere lugar ;

2° Si no procede ese trámite, la causa pasará previo sorteo y sin más trámite a estudio de los jueces de la cámara por simple resolución verbal del presidente, de que se pondrá nota por secretaría ;

3° La resolución será dictada dentro del término de diez días, y se notificará por cédula o por correo a las partes, devolviéndose, de oficio, los autos al inferior ;

4° Cualquiera que sea la forma en que proceda un recurso si la cámara anulare el procedimiento de primera instancia, una resolución o la sentencia definitiva procederá, en su caso, a substanciar la causa, y a fallarla en única instancia o a substituir la sentencia nula por otra. Estas reglas no admiten excepción.

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

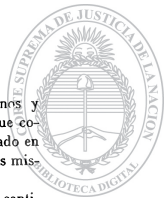
Art. 96. — Las sentencias de los tribunales argentinos y laudos arbitrales, se ejecutarán ante el juez de lo civil que corresponda y a petición de parte, una vez que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada, o cuando el recurso contra los mismos proceda en un solo efecto.

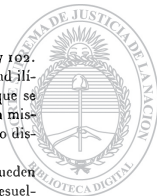
Art. 97. — Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad líquida y determinada se aplicarán las reglas del juicio ejecutivo, en cuanto no estén modificadas en el presente capítulo.

El deudor tendrá tres días para oponer excepciones y sólo son admisibles : 1ª la de falsedad de la ejecutoria, que deberá fundarse exclusivamente en que no existe materialmente o en que ha sido falsificada o adulterada ; 2ª la prescripción, por haber transcurrido el plazo de diez años desde que se dictó ; 3ª pago ; 4ª quita ; 5ª espera ; 6ª remisión. La prueba de las cinco últimas excepciones se hará por escrito que se acompañará al oponerlas, y si no se cumple con ese requisito, las rechazará el juez sin más trámite y sin recurso alguno.

Para la procedencia de las excepciones de pago, quita, espera o remisión, es necesario que se funden en hechos posteriores a la sentencia que se está ejecutando.

En el mismo término y con los mismos requisitos pueden





oponerse estas excepciones en el caso de los artículos 101 y 102.

Art. 98. — Si la sentencia condenase al pago de cantidad ilíquida procedente de frutos, el juez fijará el plazo para que se presente la liquidación, con arreglo a las bases que en la misma sentencia se hubieren fijado. Es aplicable a este caso lo dispuesto por el artículo 108.

Al presentar la liquidación y no en otra oportunidad, pueden articularse las excepciones del artículo 97, para que se resuelvan juntamente con la aprobación o desaprobación de la misma.

Si la sentencia que haya de ejecutarse condenase al pago de cantidad ilíquida procedente de perjuicios, el acreedor presentará relación de ellos al pedir cumplimiento de la ejecutoria.

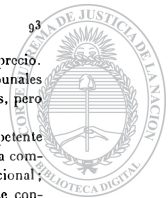
Art. 99. — Si la sentencia condenase a la misma parte al pago de cantidad líquida y otra ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin esperar a que se liquide la segunda.

Art. 100. — En caso de que la sentencia contuviere condena de hacer alguna cosa, si el condenado no cumpliese con lo que se le ordene para la ejecución de la misma, dentro del plazo que el juez le señale, se hará a su costa, o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inexecución, a elección del acreedor.

Las excepciones ya enumeradas se pueden oponer dentro de tres días de notificado el deudor que debe cumplir la obligación de hacer a que fué condenado.

Art. 101. — Si la sentencia condenase a no hacer alguna cosa, y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción a pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban si fuese posible y a costa del deudor, o a que se le indemnicen los daños y perjuicios.

Art. 102. — Cuando la condena sea de entregar alguna cosa, se mandará desapoderar de ella al obligado, y en caso que esto



no pudiese verificarse se le obligará a la entrega del precio.

Art. 103. — El cumplimiento de las sentencias de tribunales extranjeros se rige igualmente por las reglas precedentes, pero para su ejecución es necesario :

1° Que la ejecutoria haya sido dictada por juez competente y a consecuencia del ejercicio de una acción personal. La competencia se regla por los principios del derecho internacional ;

2° Que no haya sido dictada en rebeldía de la parte condenada, siempre que ésta haya tenido domicilio en la República, salvo que se trate de domicilio contractual ;

3° Que la obligación que haya dado lugar a la ejecutoria, sea válida según nuestras leyes ;

4° Que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como tal y los que las leyes argentinas requieren para que hagan fe en la República.

Art. 104. — El procedimiento a observarse en el cumplimiento de la sentencia, se rige subsidiariamente por el establecido en el artículo 40, y por las siguientes reglas :

a) En el escrito en que se oponga la excepción de falsedad debe indicarse la prueba que se hará valer ;

b) La liquidación de frutos se presentará debidamente especificada y con los requisitos del inciso anterior, en cuanto a la prueba ;

c) En las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, se empleará la fuerza pública o multas a favor del acreedor, que podrán ir aumentando con los días de demora hasta conseguir la ejecución de las mismas. Esta regla es de carácter general.

Para hacer efectivas las multas se procederá al embargo y venta de bienes del deudor, aplicándose, en lo pertinente, lo dispuesto en el juicio ejecutivo.

PERENCIÓN DE INSTANCIA

Art. 105. — La perención de instancia se regirá por las disposiciones de la ley nacional número 4550, con las modificaciones siguientes :

- a) Se produce en todos los juicios, estén o no trabados por demanda y contestación, salvo en las sucesiones, juicios de mensura, deslinde y amojonamiento ;
- b) No se produce por la inactividad de los jueces ;
- c) Se opera en la mitad del tiempo fijado por la ley citada.



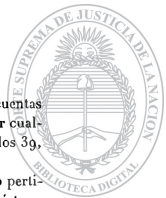
RENDICIÓN DE CUENTAS

Art. 106. — Para establecer la obligación de rendir cuentas el juez, según la naturaleza de la acción, puede adoptar cualquiera de los procedimientos establecidos por los artículos 39, 40 y 41 o el del juicio ordinario.

Art. 107. — El que rinda las cuentas observará, en lo pertinente, las formas de la demanda, y del escrito se correrá traslado al que las pidió como en el juicio ordinario, continuando el procedimiento establecido para el mismo. Las cuentas deben ser documentadas.

Para mayor ilustración puede el juez nombrar un perito que oyendo a las partes, haga un estudio de las cuentas y presente un informe sobre las mismas.

Art. 108. — Si el obligado a dar cuentas no las presentase lo hará el demandante, siendo a cargo de aquél la prueba de la inexactitud de las mismas.



JACTANCIA

Art. 109. — La acción de jactancia se acuerda contra toda persona capaz de ser demandada y que fuera de juicio se hubiere atribuido derechos propios sobre bienes que constituyan el patrimonio del demandante.

Art. 110. — El escrito en que se deduzca la acción de jactancia debe ajustarse a lo establecido para el juicio ordinario y contener la enunciación de la jactancia, con expresión de la época y lugar en que se produjo y la petición para que el jactancioso manifieste o niegue la exactitud de la misma.

Art. 111. — El juez que reciba el pedido ordenará que aquél contra quien se dirige manifieste si es o no cierta la exposición, aceptando la verdad de lo expuesto en sus puntos principales o negando la versión que se le atribuye, lo que deberá hacer dentro de los cinco días de la notificación.

Art. 112. — Si aquel contra quien se dirige la jactancia no hiciere la manifestación, la hiciere ambigüamente o reconociere la verdad de lo expuesto, el juez ordenará que dentro de los diez días entable la acción que surge de los hechos expuestos, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, caducará todo el derecho pretendido y será condenado en las costas.



Art. 113. — La acción de jactancia no puede deducirse después de seis meses de la época en que tuvieron lugar los dichos o los hechos que la constituyen, ni afecta las acciones legítimas que se tuvieran por hechos análogos.



Art. 114. — El juicio de desalojo puede promoverse antes del vencimiento del término de la locación, pero en este caso el juez podrá imponer las costas al demandante vencedor, de acuerdo con la conducta observada en el juicio por el locatario.

La sentencia sólo podrá cumplirse al vencimiento del término de la locación.

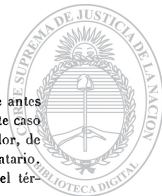
Art. 115. — La demanda y contestación se ajustarán a las formas establecidas para el juicio ordinario.

El demandado contestará dentro de tres días, si ha sido emplazado en el lugar del juicio, o de ocho en caso contrario.

El actor deberá ofrecer tres días después de la contestación de la demanda la prueba de que intente valerse para contrarrestar las afirmaciones del demandado.

Art. 116. — Las partes serán convocadas a juicio oral en el decreto en que se corra traslado de la demanda, haciéndoles saber que deben comparecer con toda la prueba de que intenten valerse. Los testigos no pueden ser más de tres por cada parte, salvo que el juez resuelva lo contrario por auto motivado.

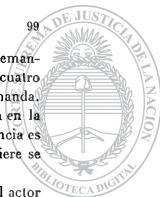
Art. 117. — Se presume, salvo pacto por escrito en contrario, que el domicilio del demandado, a los efectos de las notificaciones, es la casa o inmueble locado.



La citación se hará bajo apercibimiento de que si el demandado no compareciere, se sentenciará dentro de veinticuatro horas, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda. Si compareciere y reconociere los hechos, se sentenciará en la misma forma y plazo. En los casos precedentes la sentencia es inapelable para el locatario. Si el demandante no asistiere se celebrará la audiencia sin su intervención.

Art. 118. — Al iniciarse y al contestar la demanda, el actor y el demandado, respectivamente, manifestarán si en el inmueble locado existen o no subinquilinos. En el primer supuesto, el juez de oficio dará a estos conocimiento por cédula, de la demanda entablada contra el inquilino principal dentro del término de cuarenta y ocho horas de interpuesta, sin que ello importe tenerlos por parte en el juicio.

La sentencia de desalojamiento se hará conocer a los subinquilinos por cédula, y el término acordado para el desalojamiento al inquilino principal, empezará a contarse para todos.





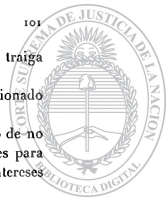
§ 1. *Diligencias preliminares y citación de remate*

Art. 119. — Se procederá ejecutivamente en las obligaciones de dar una cantidad líquida y exigible de dinero en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.

Si el crédito dependiese del vencimiento de plazo, puede pedirse no obstante el mandamiento; pero no será ejecutable hasta el día de dicho vencimiento. Si el deudor paga en el acto, las costas serán a cargo del acreedor.

Art. 120. — Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes :

- a) Los instrumentos públicos presentados en forma ;
- b) Los documentos privados suscritos por el obligado. En tal caso se pedirá la citación de éste bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer se tendrá por auténtica la firma ;
- c) Los créditos por arrendamientos de cosas inmuebles. Si ellos no constan en instrumento público debe exigirse que el demandado manifieste previamente si es locatario y en caso afirmativo que exhiba el último recibo ;
- d) Los expresamente enumerados en las leyes de la Nación, con ese carácter.



Art. 121. — El juez, en presencia de un título que traiga aparejada ejecución dictará auto donde decidirá :

a) Que se requiera al deudor por el ejecutor comisionado al efecto pague la cantidad reclamada ;

b) Que el ejecutor caso de no encontrar al deudor, o de no realizarse el pago, trabase embargo en bienes suficientes para cubrir el capital y lo que se debiere por concepto de intereses y costas, cuyo monto se fijará ;

c) Que se prevenga al deudor que dentro de los diez días siguientes a la notificación, debe oponer excepciones legítimas contra la ejecución, so pena de llevar ésta adelante ;

d) Que el ejecutor debe practicar las diligencias a que se refiere el artículo siguiente.

Art. 122. — Son deberes del ejecutor del mandamiento :

a) Trabar el embargo en los bienes que establezca el mandamiento y a falta de ello, en los que ofrezca el deudor, estando conforme el ejecutante o en los que éste señale, si estuviere en posesión de ellos el deudor ;

b) Designar depositario provisorio de las cosas muebles embargadas, hasta que el juez resuelva lo que corresponda ;

c) Notificar al ejecutado la citación de remate entregándole copia de la demanda y documentos con que se haya instruído e indicando el nombre del juez y secretario donde tramita ;

d) Pasar una copia del acta de embargo a la oficina del Registro de la propiedad para que haga la debida anotación y lo comunique al juez con expresión del estado del dominio ;

e) Requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir su cometido cuando ello fuese necesario.

Art. 123. — No son embargables :

a) El lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos ; las ropas y muebles de su indispensable uso ni los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza, sean o no de escaso valor o lujosos ;



b) Los bienes indispensables del deudor si corresponden a su posición social, aun cuando sean de gran mérito artístico;

c) Los bienes públicos de las provincias o municipios;

d) Las rentas de las mismas si están afectadas a un servicio público determinado, que se interrumpiría si los recursos destinados a costearlos fuesen susceptibles de otra aplicación;

e) Los bienes de la Nación;

f) Los bienes excluidos por leyes de la Nación (art. 1° de la ley 3942; art. 12 de la ley 4128; art. 1° y 2° de la ley 9511; art. 18 de la ley 9527; art. 13 de la ley 9688; art. 14 de la ley 10.650; art. 2° de la ley 10.284; art. 10 de la ley 11.170; art. 347 del Cód. civil);

g) Las vías férreas abiertas al servicio; las estaciones, almacenes, talleres, terrenos, obras y edificios que sean necesarios para su uso, ni las locomotoras, vías y demás efectos del material fijo y móvil destinados al movimiento de la línea.

El ejecutor hará saber el embargo dentro de los tres días de la traba, cuando el deudor no hubiere estado presente en la misma.

§ 2. *Excepciones*

Art. 124. — El ejecutado sólo podrá oponer las siguientes excepciones:

a) Incompetencia de jurisdicción, salvo que se trate del caso del artículo 4°, primer apartado.

b) Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus procuradores o apoderados, que se funde exclusivamente en la incapacidad para estar en juicio o en la falta o insuficiencia de poder;

c) Litis pendencia que se base en la existencia de otro juicio ejecutivo, por la misma obligación;

d) Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución; la falsedad consistirá en la adulteración material del do-



cumento y la inhabilidad en el hecho de no figurar éste entre los que enumera el artículo 120;

e) Prescripción;

f) Fuerza o miedo de los que, con arreglo a la ley, hacen nulo el consentimiento;

g) Pago;

h) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución;

i) Quita, espera o remisión probada por escrito o confesión;

j) Novación, probada en la misma forma.

Art. 125. — Presentado el escrito de excepciones se dará traslado al ejecutante por tres días; en estos escritos se observarán respecto de la prueba las reglas establecidas para el juicio ordinario.

Art. 126. — Si no se hubieren opuesto excepciones el juez dictará sentencia de remate sin más trámite.

Art. 127. — Opuestas las excepciones y contestadas, el juez mandará practicar las diligencias que no puedan recibirse en juicio oral, siguiéndose después el procedimiento estatuido por los artículos 159 y siguientes con las modificaciones que se enumeran a continuación:

a) El término de prueba para las diligencias a practicarse, fuera del asiento del juzgado, no podrá exceder de diez días;

b) Opuestas las excepciones y contestadas, declarará el juez sin más trámite cuáles son las pruebas admisibles y se mandarán practicar;

c) Recibidas las pruebas se dictará la sentencia.

§ 3. *Sentencia de remate*

Art. 128. — La sentencia de remate resolverá mandar llevar la ejecución adelante, con costas, o no hacer lugar a la misma,



también con costas ; en el primer caso se fijará la cantidad que el deudor debe pagar por concepto de capital, intereses y costas, y se mandará otorgar al acreedor el memorándum a que se refiere el artículo 32 para que pueda recabar de las oficinas públicas los informes pertinentes.

§ 4. Cumplimiento de la sentencia

Art. 129. — La sentencia de remate será apelable cuando se hayan opuesto excepciones e intentado probarlas.

Esa apelación se concederá sólo en el efecto devolutivo si en caso de ser condenatoria, el ejecutante diese fianza de responder de lo que percibe, si la sentencia fuese revocada por el superior. La fianza podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce el derecho, con tal que baste para su objeto, y la clasificará el juez exclusivamente.

Art. 130. — Una vez que sea ejecutable la sentencia de tranche y remate el juez dictará un auto, en el que se ordene :

a) La entrega al deudor del capital, intereses y costas ya liquidados ;

b) La venta por el martillero que designe el juez, de los bienes muebles o inmuebles embargados, los primeros sin base, y los segundos con la base para el pago de la contribución directa, previa publicación de edictos en dos diarios durante ocho días. Si no hubiere postores en el primer remate se hará un segundo sin base ;

El acreedor deberá agregar copia de los títulos que justifiquen el dominio sobre los inmuebles a enajenarse los que se pondrán a disposición del público antes del remate. El hecho se hará saber en los edictos ;

c) La designación del escribano que ha de otorgar las escrituras de dominio ;



d) El levantamiento de los embargos e inhibiciones al solo efecto de escriturar;

e) La orden de dar la posesión a los compradores una vez que éstos hayan oblado el precio de compra.

§ 5. Disposiciones generales

Art. 131. — Se establecen las siguientes disposiciones generales :

a) Si por culpa del postor a quien se hubiere adjudicado los bienes, dejase de tener efecto la venta, se procederá a un nuevo remate en la forma que queda establecida, siendo el mismo postor responsable de la disminución de precio del segundo remate, de los intereses acrecidos y las costas causadas con este motivo, al pago de lo cual será compelido ejecutivamente a petición de parte ;

b) Después de hecho el remate no se admitirá reclamación alguna sobre los títulos de los bienes ;

c) Realizados los bienes y escrituras se mandará hacer la liquidación del capital, intereses y costas del juicio. Practicada que sea se hará saber a los interesados, personalmente o por cédula, quienes dentro de tercero día de la notificación deberán expresar su conformidad o disconformidad, indicando en el último caso las razones en que la funden. En seguida, el juez sin más trámites, aprobará o mandará reformar la liquidación ;

d) Aprobada la liquidación se hará el pago de su importe prestando fianza el ejecutante, si el ejecutado lo pidiere, a las resultas del juicio ordinario que puede promover el último. A esta fianza es aplicable lo dispuesto al final del artículo 129 ;

e) Si dentro de treinta días el ejecutado no promoviere el juicio ordinario, la fianza quedará *ipso jure* cancelada ;

f) El juicio, caso de no haberse apersonado el ejecutado se-



guirá en rebeldía, sin que sea necesario nombrarle defensor, las notificaciones se le harán por ministerio de la ley ;

h) Después del juicio ejecutivo tanto el actor como el ejecutado pueden promover el juicio ordinario.

No es lícito, sin embargo, discutir nuevamente en este último las conclusiones de la sentencia del juicio ejecutivo relativas : a la interpretación de las leyes ; a la validez exclusivamente legal del título ; a la falta de personería de las partes y a las cuestiones de hecho en que la ley no limite la defensa o la prueba.

Toda excepción o defensa no admisible en el juicio ejecutivo puede hacerse valer en el juicio ordinario ;

i) El ejecutante puede renunciar al embargo de bienes y en tal caso se citará de remate al deudor, si no paga en el acto de la intimación, por el término de tres días.

j) En el juicio por cobro de créditos hipotecarios pueden las partes limitar las excepciones o su prueba, establecer la base de la venta del bien afectado, renunciar al derecho de apelar, designar el martillero que hará la subasta, y el escribano que otorgará la escritura.

Art. 132. — Las tercerías sólo pueden deducirse dentro de los diez días de trabado embargo en bienes del tercerista, o desde que éste tenga conocimiento del mismo, y se tramitarán con el demandante y el demandado en la forma establecida para los incidentes.

Art. 133. — En la tercería de dominio consentida o ejecutoriada que sea la orden de venta de los bienes se suspenderán los procedimientos principales hasta que se decida aquélla.

La tercería de mejor derecho sólo procede para discutir los créditos con privilegio especial y el pago al acreedor ejecutante no se hará hasta que no se decida sobre la misma.

Lo dispuesto en los dos párrafos precedentes no procede si la tercería no aparece verisimil *prima facie*.

Art. 134. — Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, toda persona está autorizada a requerir en calidad de tercero perjudicado por embargo, el levantamiento liso y llano de los mismos, acreditando incontinenti su posesión actual en conformidad con el título que invocase, según la naturaleza de los bienes.





Art. 135. — El procedimiento en las acciones de despojo y posesorias se ajustará a las reglas siguientes :

a) En la demanda y contestación se observará lo prescrito por los artículos 50 y 53, pero los hechos serán exclusivamente los determinados por el Código civil, según la naturaleza de la acción y el juez repelerá de oficio las pruebas que se pretendan producir sobre otros. Los testigos no pueden ser más de seis por cada parte ;

b) El traslado de la demanda se correrá por cinco días y en el decreto que lo confiera se fijará día y hora, para que las partes concurran al juicio oral, en el que se producirá la prueba, se alegará sobre la misma y se fallará la causa.

Si hubiere de practicarse prueba fuera del lugar de la causa, el juicio oral no se celebrará hasta que esas pruebas hayan sido evacuadas y estudiadas por el juez.

Art. 136. — En esta clase de juicios no son admisibles excepciones en forma de artículo previo y la sentencia, aunque haga lugar a una de ellas, se pronunciará sobre el fondo de la litis.

Art. 137. — La suspensión de obras nuevas se decretará sin oírse a la parte demandada (art. 2500, Cód. civil).

§ 1. Disposiciones generales

Art. 138. — El concurso del deudor no comerciante puede ser voluntario o forzoso.

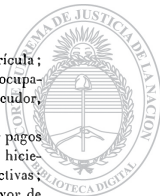
Es voluntario cuando el deudor hace cesión de sus bienes a favor de sus acreedores, presentándose por escrito, acompañando un estado de su activo y pasivo con expresión del nombre y domicilio de sus acreedores y deudores, así como una explicación de las causas determinantes del estado de sus negocios. Sin estos requisitos no se admitirá su pedido. No se incluirán en el activo los bienes que no puedan embargarse.

Es forzoso cuando un acreedor *quirografario* lo pide. Este deberá justificar que todos o la mayor parte de los bienes del deudor se hallan embargados por ejecutantes de créditos *quirografarios* o que el deudor se halla inhibido para disponer de sus bienes.

Art. 139. — Declarado el concurso, el juez resolverá :

a) Notificar personalmente o por cédula al deudor, la formación de su concurso y hacerlo saber a los acreedores por edictos que se publicarán en dos diarios que designará el juez;





b) Nombrar síndico provisorio a un contador de la matrícula ;
c) Decretar el embargo y depósito de los bienes, la ocupación de los libros y papeles y la inhibición contra el deudor, diligencias que deberán practicarse en el día ;

d) Hacer saber a los deudores la prohibición de hacer pagos o entrega de bienes al concursado, so pena, a los que lo hicieren, de no quedar exonerados de sus obligaciones respectivas ;

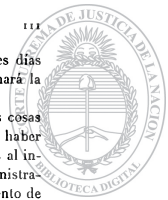
e) Fijar un término no menor de ocho días ni mayor de quince para que los acreedores presenten en secretaría los títulos justificativos de sus créditos con copias firmadas para ser entregadas al síndico ;

f) Señalar el día y hora imposterables de la junta de verificación y graduación de créditos a celebrarse seis días después de la terminación del plazo fijado en el inciso precedente ; el día de la junta y el nombre y domicilio del síndico se hará saber en los edictos a que se refiere el inciso a ;

g) Pedir a los jueces ante quienes tramitan pleitos contra el concursado los envíen para su acumulación al juicio universal. Se exceptúan los casos en que esos juicios hubiesen sido fallados en primera instancia, los que se acumularán una vez que se decidan definitivamente ; los que correspondan originariamente a la Suprema corte nacional y los que no sean acumulables por disposición expresa.

Art. 140. — El deudor puede oponerse al concurso necesario, dentro de tercero día de su declaración, en cuyo caso se hará saber a los acreedores por medio de edictos que se publicarán por una sola vez, en el mismo periódico que se hizo la publicación del artículo 139, inciso a. La oposición se substanciará de acuerdo con lo establecido para los incidentes. Ella no suspende las medidas a que se refiere el artículo citado en sus incisos b, c y d.

El deudor puede optar por la apelación que se le concederá en un solo efecto.



Si el deudor no publica los edictos dentro de los tres días de puestos a su disposición en secretaría se desestimará la oposición sin más trámite.

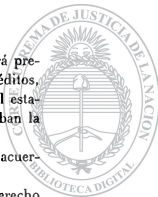
Revocado el auto del concurso deberá reponerse las cosas al estado que antes tenían. El síndico en el caso de haber realizado actos de administración deberá rendir cuentas al interesado. Los honorarios que por razón de dicha administración le correspondan no podrán exceder del ocho por ciento de lo que por sus actos hubiera beneficiado el patrimonio del concursado.

Art. 141. — El concursado en el caso de concurso forzoso deberá presentar al juzgado dentro de los cinco días de consentido el auto que lo declara, un estado detallado de su activo y pasivo con nómina y domicilio de sus acreedores y deudores privilegiados y quirografarios; si no lo presentase lo hará el síndico.

§ 2. *Verificación y graduación de créditos*

Art. 142. — Todo acreedor podrá hasta tres días antes de la fecha designada para la reunión de la junta, presentarse por escrito al juzgado observando todos o algunos de los créditos reconocidos por el deudor, o denunciando cualquier acto culpable o fraudulento del mismo, ofreciendo la prueba de sus afirmaciones. Todo acreedor que no haya sido incluido en la nómina presentada por el deudor, podrá presentarse al juzgado dentro del término fijado en el artículo 139, inciso 7°, expresando el monto, origen y naturaleza de su crédito, ofreciendo o presentado en su caso la prueba de su afirmación.

Los acreedores pueden examinar los documentos y papeles del concurso en la secretaría, antes de la verificación de créditos.



Art. 143. — La junta de verificación y graduación será presidida por el juez, procediéndose al examen de los créditos, previa lectura por el síndico de un breve informe sobre el estado general del activo y pasivo, y documentos que prueban la existencia de cada uno de aquellos.

En el informe deberá también clasificar los créditos de acuerdo con su privilegio.

Art. 144. — Si no presentase el informe perderá el derecho de cobrar honorarios y será removido de oficio o a solicitud de parte.

Art. 145. — El acreedor cuyo crédito no resulte del balance, libros o papeles del deudor, será admitido a la junta siempre que dentro del término fijado en los edictos haya presentado al juzgado los justificativos del mismo.

El concursado podrá asistir por sí o por apoderado a toda junta que se celebre, debiendo siempre citársele por cédula.

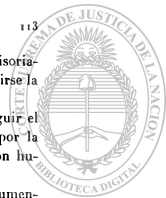
Art. 146. — El acreedor podrá hacerse representar por tercero mediante carta poder autenticada, siendo bastante, también, el poder ordinario de administración. Quien represente a más de un acreedor sólo podrá tener cinco votos, como máximo; pero el monto de todos los créditos se computará para formar — en su caso — la mayoría de cantidad o capital.

Art. 147. — Si el crédito no es objetado por el síndico, por el concursado o por acreedores que no representan la mayoría del artículo 151, se tendrá por verificado y se inscribirá en la lista de créditos reconocidos.

Esa lista contendrá los nombres de los acreedores, y la naturaleza e importe de cada crédito.

El crédito verificado puede ser objetado por cualquier acreedor a su costa y por el trámite establecido para los juicios sumarios.

Art. 148. — Si uno o más de los créditos admitidos por la mayoría fuesen objetados por el deudor, por el síndico, o por



alguno de los acreedores, se tendrán por verificados provisoriamente sin perjuicio de que en juicio sumario pueda seguirse la cuestión sobre legitimidad del crédito.

Si los objetantes fuesen acreedores, ellos deberán seguir el juicio, a su costa, sin perjuicio de ser indemnizados por la masa hasta la concurrencia de la suma en que su gestión hubiera enriquecido al concurso.

Art. 149. — Los acreedores que no presentasen los documentos justificativos de sus créditos, no serán admitidos a la masa sin que preceda la verificación de sus créditos que se hará judicialmente a su costa, por el procedimiento establecido para los juicios sumarios.

Sólo tomarán parte en los dividendos que estuviesen aún por hacerse, al deducir su reclamación, sin que se les admita en ningún caso a reclamar su parte en los dividendos anteriores.

Si cuando se presenten los acreedores morosos a reclamar sus derechos, estuviese ya repartido el haber del concurso, no serán oídos, salvo su acción personal contra el deudor.

Art. 150. — Si en la primera reunión no fuese posible la verificación de todos los créditos presentados, el juez suspenderá la audiencia para continuarla al día siguiente, haciéndolo constar en el acta, sin necesidad de una nueva convocatoria.

Art. 151. — En la misma junta una vez terminada la verificación y graduación, los acreedores reconocidos por mayoría de personas y de capital verificado, asistentes a la junta, designarán síndico definitivo. En su defecto lo designará el juez.

Podrán, también, por unanimidad y a solicitud del concursado, celebrar arreglos con éste, o pedir todos los acreedores comunes verificados, previo pago de las costas y créditos privilegiados, la adjudicación en condominio de los bienes del concurso dándole carta de pago al concursado.

Si éste se opusiere, el juez resolverá dentro de cinco días.

Art. 152. — El producto de los bienes se distribuirá proporcionalmente.



cionalmente entre los acreedores, de acuerdo con su privilegio.

Si al efectuarse la distribución hubiese algún crédito pendiente de verificación, su dividendo se depositará en el Banco de la Nación, hasta la resolución definitiva del juicio.

Art. 153. — El acreedor hipotecario y el que tenga privilegio especial, respecto del que no haya habido oposición o hubiere obtenido sentencia firme, no estará obligado a esperar el resultado final del concurso general, y será pagado con el producto de los bienes afectados a la hipoteca o privilegio, sin perjuicio de obligarles a dar caución de acreedor de mejor derecho. Tampoco será necesaria la verificación y graduación de estos créditos para que quede expedita la vía ejecutiva.

Si antes de establecido el derecho de preferencia de algún acreedor se distribuyese un dividendo se considerará como acreedor común, reservándose el precio del bien afectado hasta la concurrencia del importe de su crédito, por si esa preferencia quedase reconocida.

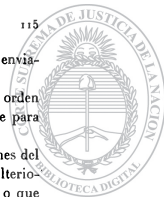
Art. 154. — Cuando se hubiese pagado íntegramente a los acreedores, celebrado convenios o adjudicados los bienes del concurso, se dará éste por terminado.

Art. 155. — El honorario del síndico lo fijará el juez. La regulación se notificará por edictos que se publicarán por tres veces consecutivas. Pueden apelar de ella el síndico, el concursado y los acreedores, dentro del tercer día de vencida la publicación.

§ 3. Administración

Art. 156. — Aceptado el cargo por el síndico, se le pondrá bajo inventario en posesión de los bienes, libros y papeles del concursado.

Si éstos estuviesen fuera del lugar del juicio se inventariarán con intervención de la autoridad correspondiente, citándose



siempre al deudor, por medio de carta certificada que le enviará el síndico.

El dinero se depositará en el banco respectivo, a la orden del juez, dejándose en poder del síndico lo indispensable para atender a los gastos de administración.

Art. 157. — El síndico es el administrador de los bienes del concurso, debiendo entenderse con él las operaciones ulteriores y toda cuestión que el concursado tuviere pendiente o que hubiere de iniciarse.

Ejecutará personalmente las funciones del cargo, a menos que tuvieran que ejercitarse fuera del asiento del juzgado, en cuyo caso podrá valerse de mandatario, con la autorización del juez.

Art. 158. — No puede ser síndico el pariente del concursado o del juez dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad, ni su amigo, ni su enemigo, ni quien con él tenga sociedad o comunidad de intereses.

El que se halle en alguno de estos casos deberá excusarse o ser substituido inmediatamente.

El juez, de oficio o a pedido de algún acreedor o del mismo deudor, podrá remover al síndico por mal desempeño del cargo o por los motivos anteriormente expresados y por el trámite establecido para los incidentes.

Art. 159. — Verificados y graduados los créditos y siempre que no se hubiesen celebrado los arreglos y adjudicación del artículo 151, el síndico pedirá la venta de los bienes con excepción :

a) Del que fuese litigioso ;

b) Del afectado a privilegio especial, embargado o ejecutado en juicio no acumulable al concurso, respecto del cual se oficiará al juez de la causa para que ponga a disposición del concurso el sobrante del precio, si lo hubiere.

Antes podrá decretarse la venta del bien de fácil deterioro o



costosa conservación, o la del indispensable para cubrir los gastos del juicio, cuando no hubiere dinero para ello.

El juez designará el martillero, observándose, para la venta, las formalidades del juicio ejecutivo.

Art. 160. — El síndico no podrá deducir demandas sin la autorización previa de la mayoría a que se refiere el artículo 151, salvo que se trate de evitar la prescripción, el vencimiento de un término u otro perjuicio.

Los acreedores pueden deducir por su cuenta las acciones que correspondan a la masa, previa autorización judicial.

La autorización al síndico sólo puede concederse en la junta de verificación y graduación.

Art. 161. — El síndico deberá presentar del primero al diez de cada mes, en incidente por separado, un estado de la administración, previo depósito en el Banco respectivo, del dinero que hubiere percibido; esas cuentas estarán a disposición de los interesados hasta fin de mes, dentro de cuyo término pueden ser objetadas por el trámite del artículo 40. La resolución que se dicte es apelable dentro de tres días.

§ 1. *Disposiciones generales*

Art. 162. — Pedida la apertura del juicio sucesorio por parte legítima (art. 328o, Cód. civil y la ley nacional número 4124) y justificado el fallecimiento del causante, el juez resolverá :

a) Mandar publicar edictos en dos diarios por treinta veces, haciendo saber la apertura del juicio.

Los edictos expresarán el nombre del juez y secretario que intervienen en la sucesión ; el término que no bajará de treinta días ni excederá de sesenta, para que los herederos que se hubieren presentado justifiquen su derecho, el día y hora en que los interesados deben concurrir a adoptar las medidas provisionales sobre custodia y administración del caudal común, bajo apercibimiento de estar y pasar por lo que resuelvan los asistentes al acto ;

b) adoptar las medidas urgentes e indispensables para la conservación de los bienes si hubiese riesgo de que se pierdan ;

Art. 163. — Si hubiese testamento se hará la declaratoria de herederos, inmediatamente de terminada la publicación de los edictos, a que se refiere el artículo 162, inciso a.





Si el testamento fuese ológrafo o cerrado, antes de la declaratoria de herederos se procederá a la protocolización del mismo.

Si surgiere oposición sobre la validez del testamento deberá formalizarse ésta dentro del término de la publicación de edictos, o en el que fije el juez, y las partes serán convocadas a juicio oral para dirimirla. El juez — según el resultado del mismo — hará la declaratoria o declarará que por el momento no hay lugar a ella. En el primer caso se deducirá la acción ordinaria dentro de quince días bajo apercibimiento de seguirse adelante el juicio sucesorio ;

En igual forma que en el juicio testamentario se procederá en los juicios *ab intestato*, pero para la comprobación del título que se invoque se dará el término de treinta días a contar desde la publicación del último edicto del artículo 162, inciso a. Si las pruebas que se invocaren existieren en el extranjero, el juez acordará el término que crea conveniente.

En las sucesiones vacantes se aplicarán las disposiciones de esta ley, en cuanto no contraríen el Código civil.

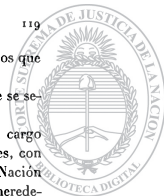
§ 2. Administración

Art. 164. — Hecha la declaratoria de herederos el juez convocará de oficio a las partes para que resuelvan :

a) Sobre la administración definitiva de los bienes de la herencia ;

b) Sobre los créditos que se hayan presentado. Antes de celebrarse esta audiencia los acreedores sólo pueden adoptar medidas conservatorias para asegurar el cobro de sus créditos. Los acreedores inasistentes, que fueren desconocidos, harán a su costa el juicio que corresponda.

La disposición precedente no es obligatoria para los acreedo-



res que tengan título que trae aparejada ejecución ni para los que puedan justificar su crédito, con instrumento público ;

c) La designación de un heredero o extraño, con el que se seguirán las acciones que se inicien contra la sucesión.

Art. 165. — Designado administrador y aceptado el cargo por el mismo, el juez ordenará se le entreguen los bienes, con excepción del dinero, que se depositará en el Banco de la Nación y los bienes muebles que fuesen de uso personal de los herederos o cónyuge.

Art. 166. — El administrador, si fuere un extraño, prestará fianza, si así lo solicitare alguna de las partes.

Art. 167. — Con todo lo relativo a la administración se formará incidente por separado.

Art. 168. — El administrador sólo podrá dar en arrendamiento bienes, con previo acuerdo de la mayoría de las partes, o resolución del juez, en su defecto.

El administrador depositará en el banco el dinero que percibiére, reteniendo lo indispensable para gastos, según apreciación que, a su pedido, hará el juez.

Art. 169. — Durante el juicio sólo podrá venderse :

a) El bien que pueda deteriorarse o depreciarse rápidamente, o sea de difícil o costosa conservación ;

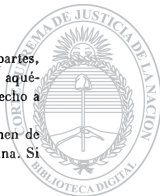
b) El que sea necesario para cubrir deudas y gastos de la sucesión ;

c) Cualquier otro, siempre que estuvieren de acuerdo las partes.

Art. 170. — El pedido de venta se substanciará en primera audiencia y se hará en subasta pública, como en el juicio ejecutivo.

Las partes pueden convenir que la venta sea privada, requiriéndose la aprobación judicial si hubiese incapaces, ausentes o disconformes.

Art. 171. — El administrador está obligado a rendir cuenta



mensualmente, o siempre que el juez o cualquiera de las partes, lo exija. Si no lo hiciere, el juez de oficio o a pedido de aquéllas, lo declarará cesante, perdiendo en este caso su derecho a percibir honorario.

La cuenta se pondrá en secretaría por seis días al examen de las partes; vencidos éstos no admitirá reclamación alguna. Si se la dedujera en tiempo, se substanciará en juicio oral.

§ 3. *Inventario y avalúo*

Art. 172. — Dictada y consentida la declaratoria de herederos se procederá a confeccionar el inventario y a practicar el avalúo.

Ambas operaciones se harán simultáneamente, siempre que no fuere imposible por la naturaleza de los bienes.

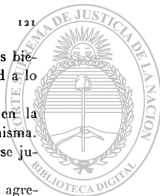
Art. 173. — El inventario judicial lo practicará el escribano designado, con asistencia de dos testigos sin perjuicio de concurrir el juez, cuando lo estime oportuno.

Art. 174. — Deben ser citados por correo para la formación del inventario, el cónyuge, los herederos o sus representantes legales, acreedores y legatarios, que se hubieren presentado.

Art. 175. — El escribano procederá a hacer la descripción de los bienes, especificándolos con la claridad y precisión convenientes, como también, de las escrituras y documentos que encuentre.

Art. 176. — Si hubiesen bienes fuera de lugar del juicio se dará comisión para inventariarlos al juez de la localidad donde se encuentren.

Art. 177. — La diligencia o diligencias de inventario serán firmadas por todos los concurrentes y en ellas se expresará cualquier disconformidad que se manifestase, designando los bienes sobre cuya inclusión o exclusión recae.



Art. 178. — Los peritos designados valuarán todos los bienes inventariados. Podrán ser recusados de conformidad a lo dispuesto por el artículo 78, inciso f.

Art. 179. — Los títulos y acciones que se coticen en la Bolsa de comercio podrán valuarse por informes de la misma. No será necesario tasar los bienes que hayan de venderse judicialmente.

Art. 180. — Practicados el inventario y avalúo serán agregados a los autos y se pondrán de manifiesto en secretaría por cinco días, para que los interesados puedan examinarlos.

Art. 181. — Si transcurriese ese término sin haberse hecho oposición, el juez los aprobará sin más trámite.

Si se dedujere oposición contra el inventario se substanciará en una audiencia sin suspender la continuación del juicio sucesorio.

Art. 182. — Si dentro del término señalado se dedujere alguna reclamación contra una valuación, el juez convocará a los interesados a juicio oral y al perito que la hubiese practicado, para que discutan la cuestión promovida.

Para dar curso a esta oposición es indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes.

Art. 183. — Si los que dedujesen oposición no asistieren al juicio oral se les tendrá por desistidos aplicándoseles las costas. En caso de inasistencia de los peritos perderán el derecho de cobrar honorarios por los trabajos practicados, cualquiera sea el resultado de las reclamaciones interpuestas.

§ 4. División

Art. 184. — Para practicarla se designará un solo abogado o contador en una audiencia, a las que serán convocadas las



partes. Si éstas estuviesen de acuerdo con el nombramiento del partidor, podrán hacer el nombramiento en un escrito firmado por todos, sin esperar el día de la junta.

Art. 185. — Designado el partidor y aceptado el cargo, se le entregarán los autos y bajo inventario los papeles y documentos relativos al caudal, para que proceda a la partición.

Art. 186. — El perito oírà a las partes interesadas con antelación, citándolas por correo a fin de hacer las adjudicaciones de conformidad con ellas, en todo lo que estén de acuerdo, o de conciliar en lo posible sus pretensiones. En cada hijuela especificará, bajo pena de nulidad, el origen y antecedentes del dominio, ubicación, extensión y límites de los inmuebles.

Art. 187. — Concluida la partición el juez la mandará poner de manifiesto en secretaría por un término de seis días para que la examinen los interesados.

Art. 188. — Vencido el término sin hacerse oposición, el juez aprobará la cuenta y mandará agregarla a los autos.

Art. 189. — Si se dedujere oposición, el juez convocará a las partes a juicio oral, así como al partidor para dirimirla. Si todas las partes estuviesen de acuerdo en las cuestiones promovidas, se harán en la cuenta las reformas pertinentes.

En caso contrario resolverá el juez dentro de seis días.

Este juicio se celebrará con el apercibimiento prevenido en el artículo 183.

Art. 190. — Aprobada definitivamente la partición, se procederá a ejecutarla, entregando a cada interesado lo que haya sido adjudicado con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos, por el secretario, una nota en la cual conste la adjudicación.

No se hará, sin embargo, esa entrega, cuando se adeudasen gastos o créditos a cargo de la masa o de los herederos que la pidiesen.

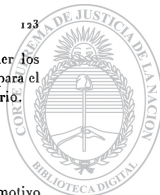
Art. 191. — Si los interesados convinieren en vender los bienes judicialmente se hará de acuerdo a lo dispuesto para el juicio ejecutivo, en cuanto aquéllos no decidan lo contrario.

§ 5. Disposiciones comunes

Art. 192. — Las dificultades que puedan surgir con motivo del nombramiento de peritos, administración y representante único de la sucesión se decidirán por la mayoría absoluta de herederos, contados por personas, y a falta de ella por el juez.

Art. 193. — El representante del Consejo nacional de educación tiene la investidura del fiscal, además de las que se le confieren por este código. No se le correrá otras vistas o traslados que aquéllos que procedan con relación a las partes.

Su intervención termina con la declaratoria de herederos, a menos que no se haya satisfecho el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.



MENSURA, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

Art. 194. — El juicio de mensura, deslinde y amojonamiento de los predios rústicos del dominio privado, corresponde al juez letrado de la circunscripción judicial donde se encuentren ubicados.

Si estuviere situado el predio en diversas jurisdicciones, será competente el juez que hubiere prevenido en la causa.

Si parte del inmueble donde se pide la mensura estuviere situado fuera de la provincia, capital federal o territorio nacional, el juicio se limitará a la superficie comprendida en ellos.

Art. 195. — Es parte legítima para promover este juicio el que acredite, con instrumento público, un derecho real sobre el terreno cuya mensura se solicita.

Art. 196. — El que promueva el juicio de mensura, deslinde o amojonamiento deberá presentar los títulos que acrediten su derecho real y expresar los colindantes actuales del terreno en todos sus rumbos, indicando sus nombres y domicilios, o manifestando que ignora estos datos.

También debe expresar si ese deslinde debe hacerse de todos los costados del terreno, o si solamente es en uno ó algunos.

No presentando títulos en forma, el juez repelerá de oficio la solicitud.

Art. 197. — Deducida la pretensión con los requisitos ne-





cesarios, el juez mandará practicar la operación de deslinde por el perito que el interesado proponga, que será ingeniero civil o agrimensor, debiendo dicho perito citar para ella a todos los linderos de los terrenos colindantes.

Art. 198. — La citación se hará por medio de circular en la que el perito expresará la situación del terreno que va a deslindar, la persona que lo solicita, el juez que conoce en el asunto y la secretaría respectiva, la que le será devuelta para constancia con la firma de los linderos citados.

Si alguno de los linderos se negara a firmarla, el perito lo hará constar en ella ante dos testigos que firmarán con él.

En caso de ausencia del dueño del terreno, la citación se hará a los mayordomos, capataces o arrendatarios.

En la citación se hará saber el día y hora, así como el sitio preciso en que principiará la operación, y la última citación se hará por lo menos dos días antes del designado.

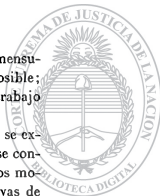
Art. 199. — Se publicarán, además, por orden del juez, por dos veces y con ocho días de anticipación, por lo menos, a contar desde el último, haciendo saber la diligencia que va a practicarse, a todos los que puedan tener interés en ella.

Art. 200. — En el día señalado se procederá a la operación con asistencia de los dueños de los terrenos colindantes que se presentaren, o de sus apoderados, quienes podrán ir acompañados con perito de su elección.

Art. 201. — Los concurrentes a las diligencias exhibirán en ella los títulos de sus propiedades, siempre que fueran necesarios y podrán hacer las reclamaciones que crean pertinentes.

Si no exhibieren sus títulos, sin causa justificada, serán de su cargo las costas del juicio que llegaren a promover contra la mensura, cualquiera que fuera su resultado.

El perito está obligado a poner su firma al margen de los documentos que se le presenten.



Art. 202. — Si no pudiere terminarse en el día la mensura se suspenderá para continuarla en el más próximo posible; lo que se expresará en acta en que constará la parte del trabajo terminada.

Art. 203. — Si hubiere conformidad en la diligencia, se extenderá acta firmada por todos los concurrentes, en que se consignará todo lo hecho, especialmente la plantación de los mojones, su posición, su dirección y las distancias respectivas de unos a otros.

El agrimensor extenderá, además, las diligencias de la operación que haya practicado y levantará un plano figurativo de la misma con arreglo a las instrucciones generales, a que debe sujetarse.

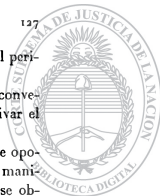
Art. 204. — El agrimensor, después de aceptar el cargo se presentará con los autos a la oficina correspondiente, solicitando las instrucciones necesarias para practicar la operación.

Art. 205. — El acta y la diligencia con el plano serán presentados, por duplicados, por el perito a la oficina correspondiente, antes de tres meses de la fecha, en que recibió el expediente, y ésta lo pasará el juez respectivo, informando a continuación acerca de su mérito facultativo, dentro del término de veinte días.

El duplicado será archivado en la oficina.

La falta de cumplimiento por el perito, en el término que queda señalado, o en el que por circunstancias especiales le acuerde el juez, anulará su operación facultativa y lo hará responsable de los perjuicios causados, salvo el caso de fuerza mayor debidamente comprobado.

Art. 206. — Si la oficina correspondiente observase inexactitud o falta en la parte facultativa de la operación, que el perito debe rectificar o subsanar, el juez mandará que así lo verifique, dentro del término prudencial que le señale; e ínterin no



se practique la operación y sea aprobada por la oficina, el perito no podrá cobrar sus honorarios.

Art. 207. — Con todo a la vista y no resultando inconveniente, el juez dará su auto aprobatorio y mandará archivar el expediente.

Art. 208. — Si por alguno de los colidantes se dedujere oposición al practicarse la mensura, o si estos no hubiesen manifestado expresamente su conformidad, por acto escrito, se observarán las reglas siguientes :

a) La operación se llevará a efecto, sin que ella afecte en nada los derechos de posesión o dominio de las partes;

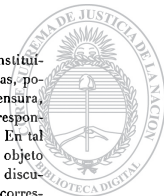
b) El agrimensor determinará, en cuanto sea posible, el área que comprende la oposición de cada colindante;

c) El juez, antes de aprobar la mensura, mandará poner los autos a la oficina por un término que no excederá de treinta días, dentro del cual los interesados formalizarán su protesta, exponiendo las razones en que se fundan, debiendo en su caso deducirse la acción que corresponda, so pena de aprobarse la mensura;

d) Si hubiere contradicción sobre el hecho de la posesión del oponente a la mensura, se resolverá la incidencia por el trámite establecido para las acciones posesorias, y según sea su resultado deberá deducirse la acción, por el que aparezca no estar en posesión del inmueble litigioso.

El incidente lo promoverá cualquiera de las partes y la prueba corresponderá a ambas. Las acciones reales que den lugar a la mensura se deducirá por el que no resulte poseedor y en juicio ordinario dentro de diez días. Si quien debe deducirla es el mensurante y no lo hiciere se desaprobará la operación, con costas; si la acción corresponde iniciarla a uno de los opositores y tampoco lo hiciere, la operación será aprobada, con igual sanción.

Art. 209. — Cuando hubiere necesidad de conocer los limi-



tes de un terreno para el ejercicio de derechos reales constituidos sobre él, o para preparar acciones reales o posesorias, podrá solicitarse, a esos fines, la operación de simple mensura, la cual no afectará en nada los derechos que puedan corresponder a terceros sobre la propiedad o posesión del terreno. En tal caso deberá el solicitante expresar con toda claridad el objeto de su solicitud, y practicada la mensura y sin admitirse discusión alguna a su respecto, previo dictamen de la oficina correspondiente sobre el mérito técnico de la operación, se mandará dar al interesado copia de las diligencias y se archivará el expediente.

Art. 210. — Cuando la acción sea de deslinde, por contigüidad y confusión de predios rústicos, el juez convocará a las partes a juicio verbal para que se pongan de acuerdo en el nombramiento de un perito único, y en caso de no hacerlo, lo designará de oficio para que practique la operación. El procedimiento subsiguiente será, en lo pertinente, el del juicio de mensura.



Art. 211. — No se puede someter a árbitros :

- a) Las cuestiones que no puedan ser materia de transacción ;
- b) Las que versen sobre disenso, nulidad de matrimonio, divorcio, estado civil de las personas, capacidad, validez o nulidad de testamentos y en general aquellas en que exista una prohibición de la ley.

Los que no tienen actitud legal para obligarse no pueden comprometer en árbitros.

Art. 212. — Para comprobar la existencia de la cláusula compromisoria se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 41 de este código, según lo resuelva el juez.

Terminada la incidencia se procederá por el juez a formar el compromiso que contendrá :

- a) Fecha del mismo, nombre de los otorgantes, y su domicilio legal y real ;
- b) Nombre y domicilio de uno o más arbitradores, en número impar, designados uno por cada parte para que procedan formando tribunal ;
- c) La cuestión o cuestiones que se sometan al fallo ;
- d) La estipulación de una multa o sanción a cargo de la parte que no cumpla con los actos indispensables para la realización del compromiso ;



e) El lugar en que han de conocer y fallar los árbitros y el plazo para esto último ;

El nombramiento recaerá en personas capaces. Se designará además un escribano para que actúe en el juicio, el que procederá con análogas atribuciones de los secretarios ;

f) Si las partes no se pusieran de acuerdo sobre cualquiera de los puntos, decidirá el juez sin más trámite.

Si se hubiere renunciado al recurso de apelación, procederá, no obstante éste, por haberse laudado fuera de término o sobre puntos no comprometidos.

Art. 213. — Verificado el nombramiento se le hará saber a los árbitros y al escribano. De su aceptación o negativa se entenderá diligencia, que firmarán ante el secretario del juzgado.

Si alguno no aceptare o falleciere, o se incapacitare, se le reemplazará conforme a lo dispuesto para el nombramiento. Si el segundo designado por la misma parte, tampoco aceptare, le nombrará reemplazante el juez, si lo solicitare la parte contraria. La misma regla se aplicará en caso de renuncia. La aceptación da derecho a las partes para compelerlos a cumplir su deber, bajo pena de daños y perjuicios y multa de doscientos a dos mil pesos, según la importancia del asunto.

Los árbitros son recusables por las mismas causas que los jueces y en la misma oportunidad, ante el magistrado que intervino en la formación del tribunal.

Los árbitros tienen derecho a cobrar honorarios, si no hubieran hecho renuncia expresa, los que se regularán por el juez, en la forma ordinaria.

Art. 214. — Los árbitros substanciarán la causa con sujeción al procedimiento que establezcan las partes. Si no se pusieran de acuerdo lo determinará el juez.

Art. 215. — Resolverán el juicio según su saber y entender, si no se hubiere establecido que lo sea con arreglo a derecho, sobre todas las cuestiones contenidas en el compromiso, den-



tro del término señalado. En las cuestiones de derecho el voto de la mayoría de los arbitradores hará sentencia de acuerdo con las reglas del artículo 94.

En las cuestiones de hecho se votará por la afirmativa o la negativa en las preguntas de si están o no probadas.

El artículo 94 citado no es aplicable cuando los árbitros deban fallar según su saber y entender.

Art. 216. — Si se hubiere establecido que el tribunal debe fallar con arreglo a derecho, la sentencia revestirá las formas establecidas para el juicio ordinario y contra ella sólo se acordará el recurso de apelación procedente en el mismo.

Art. 217. — El recurso deberá interponerse dentro de cinco días, ante los mismos árbitros conociendo de él, el tribunal de segunda instancia que hubiera entendido en la causa, si ésta se hubiera fallado en la justicia ordinaria. Los autos se elevarán dentro de tercero día, resolviendo el tribunal sin más trámite dentro de cuarenta.

En el arbitraje forzoso se procederá siempre por los árbitros según su saber y entender. La sentencia sólo será apelable, en este caso, si las partes expresamente lo han convenido. En todo caso la cámara sólo conocerá del derecho, quedando firme los hechos, cualquiera que sea la clase de arbitraje, salvo el caso del último párrafo del artículo 212, inciso *f*, segundo párrafo.

Los árbitros podrán usar de las medidas coercitivas del artículo 104, inciso *c*.

Esta resolución es apelable en ambos efectos y en relación, debiendo formarse incidente en la forma determinada por el artículo 49.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS



Art. 218. — Los jueces sólo pueden ser recusados por las siguientes causas :

a) Parentesco de consanguinidad con alguno de los litigantes dentro del cuarto grado, y el de afinidad dentro del segundo ;

b) Comunidad o sociedad que exista pendiente del pleito, entre él o sus parientes consanguíneos, o afines dentro del segundo grado, y cualquiera de los litigantes aunque la sociedad sea en participación, pero no la anónima ;

c) Ser él o sus parientes dentro del segundo grado, acreedores, deudores o fiadores del litigante, o haber recibido de él, beneficios de importancia, o después de comenzado el pleito, dádivas aunque sean de poco valor ;

d) Amistad con el litigante, antes o después de comenzado el pleito, que se manifieste por una grande familiaridad ;

e) Cuando tenga odio o resentimiento contra el recusante por hechos conocidos, o que en los seis meses anteriores al pleito le hubiese amenazado en disensiones privadas ;

f) Si hubiese pleito pendiente con el recusante, iniciado con anterioridad a aquél en que se deduce la recusación o en cualquier ocasión le hubiese hecho daño grave en su persona, honor o bienes ;



g) Ser o haber sido denunciador o acusador del recusante ante los tribunales ordinarios, o denunciado o acusado por este ante los mismos tribunales, si se ha dado curso a las mismas ;

h) Ser o haber sido denunciado o acusado en juicio político por el recusante, siempre que la comisión respectiva de la cámara o jurado, hubiera aconsejado hacer lugar a la formación de causa ;

i) Si hubiese dado recomendaciones sobre el pleito, antes o después de principiado ;

j) Siempre que por cualquier causa tenga interés en las resultas del pleito ;

k) Haber sido defensor de alguno de los litigantes, o emitido dictamen en el pleito como letrado.

Art. 219. — Incurre en incorrección el juez que conoce en juicio donde interviene como abogado o procurador desde el principio del juicio su amigo íntimo, o su pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o si le confiere nombramientos de oficio en cualquier oportunidad. La cámara puede imponerle en tal caso corrección disciplinaria. La corrección se substanciará por el trámite establecido para los incidentes.

Art. 220. — La recusación deberá ser deducida por cualquiera de las partes al presentar su primer escrito, salvo que la causa sea sobreviniente, o cuando conocida recién por la parte la dedujere dentro del tercero día de saberla, y con la afirmación de haber llegado a su conocimiento recientemente, en cuyo caso podrá entablarla hasta la citación para sentencia.

La recusación de los jueces de las cámaras de apelación deberá deducirse en la oportunidad a que se refiere el artículo 85 y conocerán de ella los camaristas que queden hábiles, aun cuando sea uno solo. En caso contrario pasará el incidente a la otra cámara.

Art. 221. — Los secretarios pueden ser recusados por algu-



na de las causas enumeradas en el artículo 218, salvo el caso del inciso *h*.

Deducida la recusación, el juez averiguará sumariamente el hecho en que se funde, y sin más trámite resolverá el artículo.

Art. 222. — En caso que los representantes del ministerio público tuviesen algún motivo de legítimo impedimento, deberán manifestarlo; y el tribunal o juez de la causa podrá darlos por separados, pasando el asunto a quien deba subrogarlo. Lo mismo se procederá cuando se trate del asesor de menores.

Art. 223. — Cuando un juez se encuentre comprendido en alguna de las causas del artículo 218, o en que intervenga su amigo íntimo como procurador o abogado, debe excusarse de oficio, mandando pasar los autos al subrogante legal. Si éste entendiere que ella es improcedente se formará incidente que será pasado al presidente de la cámara para que lo resuelva, sin que esto paralice la substanciación de la causa. Lo mismo se hará si se tratare de recusación.

Aceptada la excusación o recusación los autos quedan radicados en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparezcan las causas que las originaron.

Art. 224. — El reemplazo de los jueces y demás funcionarios se hará de acuerdo con la legislación vigente mientras los tribunales civiles superiores no dicten su reglamento.

En dicho reglamento puede, además, establecerse reglas procesales, siempre que no contraríen las disposiciones de este código.

Art. 225. — El Poder ejecutivo procederá dentro de noventa días de sancionada esta ley a establecer la estadística judicial.

Art. 226. — Mientras no se reforma la ley orgánica de los tribunales ordinarios de la capital federal en el fuero civil y comercial, funcionarán con el siguiente personal:



	Mensual	Anual
a) 38 jueces a pesos 1800 cada uno....	68.400	820.800
36 secretarios a pesos 1000 cada uno..	36.000	432.000
36 oficiales primeros a pesos 500 cada uno	18.000	216.000
36 auxiliares a pesos 200 cada uno...	7.200	86.400
36 escribientes a pesos 175 cada uno..	6.300	75.600
36 ordenanzas a pesos 120 cada uno..	4.320	51.840
Para gastos de oficina de 36 juzgados a pesos 50 cada uno.....	1.800	21.600
36 empleados encargados de las notificaciones y funciones que corresponden actualmente a los oficiales de justicia, a pesos 350 cada uno.....	12.600	151.200
1 jefe de los mismos.....	450	5.400
Para gastos de movilidad de los 36 empleados notificadores.....	2.500	30.000
b) 12 representantes del ministerio público que desempeñarán indistintamente las funciones que corresponden al fiscal, defensor de pobres y asesor de menores, a pesos 1500 cada uno....	18.000	216.000
20 auxiliares del ministerio público, abogados que desempeñarán las funciones que aquéllos les encomienden ante los jueces, a pesos 800 cada uno	16.000	192.000
10 auxiliares sin facultad de intervenir ante los jueces, para el ministerio público a pesos 300 cada uno.....	3.000	36.000
12 ordenanzas para el ministerio público a pesos 120 cada uno.....	1.440	17.280
Gastos de oficina para el ministerio público, a pesos 25 cada uno.....	300	3.600
c) Cuerpo de taquígrafos-dactilógrafos compuesto de :		
1 jefe a.....	850	10.200
1 2º jefe a.....	700	8.400
20 taquígrafos a pesos 500 cada uno..	10.000	120.000
20 dactilógrafos a pesos 200 cada uno	4.000	48.000
Total pesos.....		2.542.320

Art. 227. — Anualmente las cámaras civiles y comercial, reunidas en pleno e integradas por dos jueces de lo civil y dos de lo comercial, determinarán el número de jueces que debe atender cada fuero, consultando en lo posible la preparación especial de cada uno de ellos y sus deseos, y las funciones de reemplazante y otras análogas que tendrán los dos jueces que se crean sin personal. Puede confiarse, a uno o más jueces, que entiendan exclusivamente en los juicios de convocatoria u otros especiales.

En la misma forma se determinará el modo en que se hará el reemplazo de los representantes del ministerio público, cuando se produzca un caso de incompatibilidad evidente de las funciones de asesor, fiscal o defensor de pobres y se dictará toda la reglamentación de los nuevos organismos que se crean por la ley, así como su contralor.



INDICE



Decreto ordenando la publicación del Proyecto	5
Prólogo	7
Antecedentes del Proyecto	13
Carta del autor al Decano de la Facultad de derecho y ciencias sociales, proponiendo proyectar un Código de procedimiento civil...	13
Resolución del Consejo directivo aprobando el proyecto enunciado en la carta	15
Bases sancionadas por la Conferencia nacional de abogados del año 1924	16
Estudiantes que han colaborado en el Proyecto	17
Expedientes revisados	19
Miembros de la comisión de la Conferencia nacional de abogados que despacharon las bases sancionadas por aquella	19
Comisión que estudió este Proyecto en el Colegio de abogados de la Capital	20

CAPÍTULO I

Reglas de competencia (art. 1 a 8).....	21
---	----

CAPÍTULO II

Cuestiones de competencia (art. 9 a 10)	26
---	----

CAPÍTULO III

Términos judiciales (art. 11 a 12)	28
--	----

CAPÍTULO IV

Notificaciones, traslados y copias (art. 13 a 24)	30
---	----



CAPÍTULO V

Poderes y deberes del juez (art. 25 a 28)	36
---	----

CAPÍTULO VI

Partes (art. 29 a 34)	39
-----------------------------	----

CAPÍTULO VII

Costas (art. 35)	44
------------------------	----

CAPÍTULO VIII

Honorarios (art. 36)	46
----------------------------	----

CAPÍTULO IX

Rebeldía (art. 37)	48
--------------------------	----

CAPÍTULO X

Juicios sumarios y sumarísimos (art. 38 a 48)	50
---	----

CAPÍTULO XI

Incidentes (art. 49)	58
----------------------------	----

CAPÍTULO XII

Demanda y contestación (art. 50 a 54)	60
---	----

CAPÍTULO XIII

Excepciones dilatorias (art. 55 a 58)	63
---	----

CAPÍTULO XIV

Preparación del juicio oral (art. 59 a 60)	65
--	----

CAPÍTULO XV

Juicio oral (art. 61 a 65)	67
----------------------------------	----



CAPÍTULO XVI

Distintos medios de prueba	70
Posiciones (art. 66 a 71)	70

CAPÍTULO XVII

Prueba instrumental (art. 72)	72
-------------------------------------	----

CAPÍTULO XVIII

Prueba testimonial (art. 73 a 77)	74
---	----

CAPÍTULO XIX

Prueba de peritos (art. 78 a 80)	76
--	----

CAPÍTULO XX

Inspección ocular (art. 81)	79
-----------------------------------	----

CAPÍTULO XXI

Sentencia (art. 82)	80
---------------------------	----

CAPÍTULO XXII

Recurso de apelación (art. 83 a 87)	82
---	----

CAPÍTULO XXIII

Recurso de reposición (art. 88)	86
---------------------------------------	----

CAPÍTULO XXIV

Recurso de hecho (art. 89 a 90)	87
---------------------------------------	----

CAPÍTULO XXV

Procedimiento en segunda instancia (art. 91 a 95)	88
---	----

CAPÍTULO XXVI

Ejecución de sentencia (art. 96 a 104)	91
--	----



CAPÍTULO XXVII

Perención de instancia (art. 105).....	94
--	----

CAPÍTULO XXVIII

Rendición de cuentas (art. 106 a 108).....	95
--	----

CAPÍTULO XXIX

Jactancia (art. 109 a 113).....	96
---------------------------------	----

CAPÍTULO XXX

Juicio de desalojo (art. 114 a 118).....	98
--	----

CAPÍTULO XXXI

Juicios ejecutivos

§ 1 Diligencias preliminares y citación de remate (art. 119 a 123) ..	100
§ 2 Excepciones (art. 124 a 127).....	102
§ 3 Sentencia de remate (art. 128)	103
§ 4 Cumplimiento de la sentencia (art. 129 a 130).....	104
§ 5 Disposiciones generales (art. 131).....	105

CAPÍTULO XXXII

Tercerías (art. 132 a 134).....	107
---------------------------------	-----

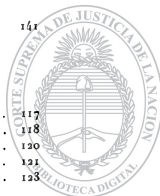
CAPÍTULO XXXIII

Acciones posesorias y de despojo (art. 135 a 137).....	108
--	-----

CAPÍTULO XXXIV

Concurso civil

§ 1 Disposiciones generales (art. 138 a 141).....	109
§ 2 Verificación y graduación de créditos (art. 142 a 155)	111
§ 3 Administración (art. 156 a 161).....	114



CAPÍTULO XXXV

Juicio sucesorio

§ 1 Disposiciones generales (art. 162 a 163).....	117
§ 2 Administración (art. 164 a 171).....	118
§ 3 Inventario y avalúo (art. 172 a 183).....	120
§ 4 División (art. 184 a 191).....	121
§ 5 Disposiciones comunes (art. 192 a 193).....	123

CAPÍTULO XXXVI

Mensura, deslinde y amojonamiento (art. 194 a 210)	124
--	-----

CAPÍTULO XXXVII

Juicio de árbitros (art. 211 a 217)	129
---	-----

CAPÍTULO XXXVIII

Disposiciones finales y transitorias (art. 218 a 227)	132
---	-----